



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO



**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLITICAS**

TESIS

Vulneración a las garantías al debido proceso en la prescripción extintiva de la
nulidad del acto jurídico

PRESENTADO POR

Bach. Cubas Rodríguez, Gary Jean Marco

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

ASESOR

Abog. Vargas Rodríguez, César

LAMBAYEQUE, 2019

Tesis denominada: VULNERACIÓN A LAS GARANTÍAS AL DEBIDO PROCESO EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO, presentada para optar el TÍTULO DE ABOGADO, por:

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION

ACTA N° 216

Sustentación para optar el Título de Abogado de don: **Gary Jean Marco Cubas Rodríguez.**

En la ciudad de Chiclayo, en la Auditorio "José Antonio Silva Vallejo" del Consultorio Jurídico Gratuito de Chiclayo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; siendo las 12:00 m. del día viernes 08 de noviembre del 2019, se reunió el Jurado conformado por los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE	: Dr. RAFAEL HERNANDEZ CANELO.
SECRETARIO	: Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO.
VOCAL	: Abog. JESÚS ALICIA FERNÁNDEZ PALOMINO.

Con el objeto de calificar la sustentación del Bachiller **Gary Jean Marco Cubas Rodríguez**, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mediante la Modalidad de Presentación, Sustentación y Aprobación de Tesis.

El señor Presidente invita al sustentante para que exponga la Tesis titulada: "**LA VULNERACIÓN A LAS GARANTÍAS AL DEBIDO PROCESO EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL ACTO JURÍDICO NULO**".

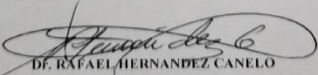
Rendido por el bachiller: **Gary Jean Marco Cubas Rodríguez**, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", autorizado con Resolución N° 178-2019-UI-FDCP-UNPRG, de fecha 31 de octubre del 2019, en cumplimiento al requisito para optar el Título Profesional de ABOGADO, exigido en el Reglamento del Vicerrectorado de Investigación y de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho.

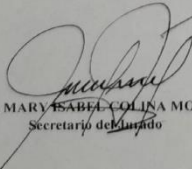
Obteniendo el siguiente resultado: *Aprobado con la nota de 1.8* y el calificativo *de Muy Bueno* y apto para obtener el Título Profesional debiendo cumplir con las exigencias de las normas legales vigentes.

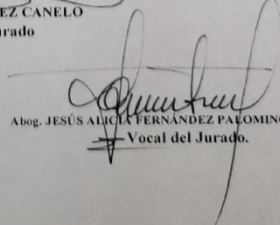
Siendo las *1* p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado la presente acta.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinente.

Chiclayo, viernes 08 de noviembre del 2019.


Dr. RAFAEL HERNANDEZ CANELO
Presidente del Jurado


Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO
Secretario del Jurado


Abog. JESÚS ALICIA FERNÁNDEZ PALOMINO
Vocal del Jurado.

DEDICATORIA

A mi papá por ser mi modelo y ejemplo con su
fortaleza inquebrantable para sacar adelante a
su familia.

A mi mamá que, de seguro, desde la eternidad
me sigue cuidando y guiando

A mi compañera de vida, Leidy, quien me ha
dado el regalo más hermoso, nuestro hijo, que
me motiva a ser cada vez mejor.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar agradezco a Dios por las bendiciones dadas a lo largo de la vida, y su guía en el transcurso de mi existencia.

Gracias a mis padres: Osias Cubas e Irma Rodríguez, por ser los principales promotores de mis sueños, por confiar y creer en mis expectativas, por los consejos, valores y principios que me han inculcado.

Asimismo, agradezco a mis querido docentes de mi alma mater Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por haberme compartido sus conocimientos a lo largo de mi formación profesional.

INDICE

DEDICATORIA	1
AGRADECIMIENTO	2
INDICE	3
RESUMEN.....	8
ABSTRACT	9
INTRODUCCIÓN	10
CAPITULO I.....	¡Error! Marcador no definido.
ASPECTOS METODÓLOGICOS.....	¡Error! Marcador no definido.
1.1. Realidad Problemática.....	¡Error! Marcador no definido.
1.1.1. Planteamiento del Problema	13
1.1.2. Formulación del Problema	14
1.2. Justificación e Importancia del Estudio.....	15
1.2.1. Justificación del Estudio	15
1.2.2. Importancia del Estudio	16
1.3. Objetivos	16
1.3.1. Objetivo General	16
1.3.2. Objetivos Específicos	16
1.4. Hipótesis.....	17
1.5. Variables	17
1.5.1. Variable Independiente	17
1.5.2. Variables Dependientes	17
1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección	17

1.6.1 Métodos	17
1.6.1.1. Método Exegético Jurídico	18
1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico	18
1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo	19
1.6.1.4. Método Inductivo	20
1.6.2. Técnicas	20
1.6.2.1. Análisis Documental	20
1.6.2.2. Observación	21
1.6.2.3. Entrevista	21
1.6.3. Instrumentos	22
1.6.3.1. La Ficha	22
1.6.3.2. La Guía de Observación	22
1.6.3.3. La Guía de Entrevista	23
CAPITULO II	¡Error! Marcador no definido.
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO	¡Error! Marcador no definido.
2.1. Prescripción	24
2.1.1. Generalidades	24
2.1.2. Concepto	26
2.1.3. Fundamentos	28
2.1.4. Clases	31
2.1.4.1. Prescripción Adquisitiva	31
2.1.4.2. Prescripción Extintiva	33
2.1.4.3. La Prescripción se deduce a Pedido de Parte	36
2.1.4.4. Renuncia de la Prescripción Ganada	38

2.1.5. Plazos Prescriptorios.....	40
2.1.5.1. La Interrupción y la Suspensión.....	42
2.2. Nulidad del Acto Jurídico.....	44
2.2.1. Concepto	44
2.2.2. Características	46
2.2.2.1. El Acto Jurídico Nulo lo es de Pleno Derecho	47
2.2.2.2. La Nulidad puede ser solicitada por cualquiera que tenga interés o por el Ministerio Público	49
2.2.2.3. La Nulidad Absoluta puede ser Declarada de Oficio.....	53
2.2.2.4. El Acto Jurídico no puede ser Confirmado	55
2.2.3. Distinción con Otra Figuras: Ineficacia y Anulabilidad.....	56
2.2.3.1. Ineficacia	56
2.2.3.2. Anulabilidad	57
CAPITULO III.....	58
DEBIDO PROCESO.....	58
3.1. Debido Proceso Legal.....	58
3.1.1. Concepto	58
3.1.2. Formas.....	60
3.1.2. Pluridimensionalidad	60
3.2. Debido Proceso Civil.....	62
3.2.1. Generalidades	62
3.2.2. Concepto	63
3.2.3. Fundamento	63
3.2.4. Importancia	64
3.2.5. Principios del Debido Proceso Civil	64

3.3. Diferencias entre el Debido Procesal Legal y Debido Proceso Civil.....	70
CAPITULO IV	72
ANÁLISIS Y RESULTADOS	72
4.1. Tipo de Investigación	72
4.1.1. De Acuerdo al Fin que se Persigue	72
4.1.2. De Acuerdo al Diseño de Investigación	73
4.2. Población y Muestra	73
4.2.1. Población.....	73
4.2.2. Muestra	73
4.3. Procesamiento de Datos	74
4.3.1. Análisis de Encuestas	74
4.3.2. Análisis De Documentales	81
PROYECTO DE LEY	99
4.1.1. Exposición de Motivos	99
4.1.2. Identificación del Problema	101
4.1.3. Propuesta de Solución.....	101
4.1.4. Justificación de la Propuesta.....	102
4.1.5. Efecto de la Propuesta en el Ordenamiento Jurídico	103
4.1.6. Análisis del Costo Beneficio.....	103
CAPITULO V.....	105
CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS	105
5.1. Discusión de los Resultados	105
5.1.1. Discusión sobre el Objetivo: Describir la prescripción extintiva de la nulidad del acto jurídico.....	105
5.1.2. Discusión sobre el Objetivo: Describir el debido proceso	106

6.1.3. Discusión sobre el Objetivo: Proponer la derogatoria y reforma del Código Civil, en el extremo que regula que la nulidad del acto jurídico prescribe a los diez años.....	107
6.2. Resultados de Validación de Variables	108
6.2.1. Respecto a la Variable Independiente: Prescripción Extintiva de la Nulidad del Acto Jurídico.....	109
6.2.2. Respecto a la Variable Dependiente: Vulneración a las Garantías al Debido Proceso.	110
6.3. Contrastación de Hipótesis.....	110
CONCLUSIONES.....	112
RECOMENDACIONES.....	114
BIBLIOGRAFIA.....	115

RESUMEN

En el presente estudio se examina los problemas teóricos y prácticos que trae como consecuencia la aplicación del plazo de prescripción extintiva de los actos nulos, regulados en 10 años por el inciso primero del artículo 2001 del Código Civil. Se ha realizado una investigación del tipo descriptiva en la que se plantea como hipótesis que si se aplicara la imprescriptibilidad de dicha norma no habría vulneración a las garantías del debido proceso. Para ello se realizaron encuestas a diversos operadores jurídicos sobre este tema de la que se concluye que se encontrarían conformes con una modificatoria. Por este motivo es que también se realizó un proyecto de modificación normativa.

ABSTRACT

The present study examines the theoretical and practical problems that result in the application of the term of extinction of null acts, regulated in 10 years by the first paragraph of Article 2001 of the Civil Code. An investigation of the descriptive type has been carried out in which it is hypothesized that if the imprescriptibility of said norm were applied there would be no violation of the guarantees of due process. To this end, surveys were carried out on various legal operators on this subject, which concludes that they would be satisfied with a modification. For this reason, a regulatory modification project was also carried out.

INTRODUCCIÓN

Mediante el presente trabajo de investigación titulado “Vulneración a las garantías al debido proceso en la prescripción extintiva de la nulidad del acto jurídico”, se demuestra que con la actual configuración legislativa de la prescripción extintiva de nulidad del acto jurídico nulo en un plazo de 10 años, dado en el inciso 1 del art. 2001 del Código Civil, está perjudicando al titular del derecho; ya que resulta contraproducente señalar que el acto jurídico nulo no se encuentra en condiciones de haberse confirmado, de lo contrario siempre será nulo; sin embargo, al existir un plazo de prescripción para solicitar al Órgano Jurisdiccional su nulidad, al vencimiento del plazo sin haberse accionado se estaría automáticamente confirmándose un acto nulo, pues si plantea la nulidad fuera del plazo, deducida la prescripción extintiva y amparada la misma se dará la conclusión del proceso y en consecuencia el archivo del expediente.

Esto trae como consecuencia, tanto problemas teóricos como prácticos en su aplicación ya que, de recurrir a la vía judicial, la sentencia que se emita solo tiene un carácter declarativo, ya que solo se limita a reconocer una situación de hecho que ya ha operado ipso iure. Por lo tanto, no debería existir un plazo de prescripción para que pueda emitirse.

En este mismo sentido y siendo quizás el único autor nacional en emitir un comentario crítico directo es el maestro Lizardo Taboada Córdova (2002), quien en su libro titulado: *Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato*, señala que:

Para efectos prácticos, de operar la prescripción de la acción de nulidad en un supuesto determinado, se estaría prácticamente imposibilitando la declaración judicial de nulidad, con la consiguiente inseguridad jurídica para las partes y los terceros, creando una falsa apariencia de validez del negocio nulo (pág. 202).

Bajo estas premisas es que existen algunas Casaciones como la Nº 1519-2008-ICA, misma donde tomándose en cuenta el establecimiento del hecho de concretarse una declaración prescrita respecto a la acción de nulidad, el acto jurídico carece de valor, razón por la cual se determinó que puede llevarse a cabo una demanda a la nulidad de actos celebrados con posterioridad y poder encontrar su fundamento en aquel. Asimismo, en la Casación Nº 1458-2007-LIMA se determinó que el acto de gozar el derecho de propiedad implica el ejercer la atribución reivindicatoria, pues el fin que se persigue es el mismo, por tanto, sus efectos de imprescriptibilidad deben extenderse a aquel.

Debe recordarse además en nuestro Código Civil existen acciones imprescriptibles como por ejemplo la petición de filiación, herencia, partición hecha con preterición, la reivindicación. Pudiendo, por tanto, también la acción de nulidad del acto jurídico entrar dentro de estas acciones imprescriptibles, tanto más si se encuentra protegido por la Constitución Política del Perú, siendo en el artículo 70 donde se presenta la vigencia de la garantía respecto a la inviolabilidad dentro de los límites de la ley.

En repercusión a lo último mencionado se encuentra la pérdida del goce de derecho a un proceso legítimo, por lo que se limita este derecho al plazo de prescripción de 10 años, en tanto que tal como señalan diversos autores como Díez Picazo “la acción de nulidad no es imprescindible ejercitarla. Tal nulidad opera ipso iure, porque el negocio lleva en sí mismo en su estructura, la ineficacia. Por tanto, las

partes que lo han concluido pueden actuar como si éste no hubiera acontecido, como si se diera la misma situación preexistente a su celebración”

CAPITULO I

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1. Realidad Problemática

Es importante tener en consideración lo que se comprende por realidad problemática, así pues, dicho contenido deberá incorporar el detalle de las circunstancias que se han podido verificar en el devenir del tiempo, vale decir en un espacio temporal y jurídico, así ello deberá plasmarse en diversos ámbitos comprendiendo entre los más importantes, a la marcación del perjuicio social, como consecuencia directa, luego el legislativo como respuesta del Estado y finalmente la doctrina como elemento de comprensión por los estudiosos del derecho que buscan interpretar la regla a través de las definiciones.

Por lo mismo esta primera parte debe ser concentrada en dos rubros, lo anteriormente señalado en lo que se conoce como el planteamiento del problema y luego toda esa descripción resumida en un solo cuestionamiento que ampare el sentido de la investigación, esto es la formulación del problema.

1.1.1. Planteamiento del Problema

Bajo la prescripción extintiva que lleva a cabo la acción, el acto jurídico cuyo carácter es de nulidad, halla el sometimiento dentro de los parámetros dictaminados por la normativa constitucional. Indicándose que una vez pasado el plazo

establecido de diez años desde la celebración del acto nulo, se produce la prescripción tal cual.

Por lo tanto, el perjudicado con un acto jurídico nulo debe tener expedito su derecho para accionar en cualquier momento, por cuanto resulta contraproducente señalar que el acto jurídico nulo tiene la posibilidad de confirmarse, de no ser así, siempre será nulo; sin embargo, al existir un plazo de prescripción para solicitar al Órgano Jurisdiccional su nulidad, al vencimiento del plazo sin haberse accionado se estaría automáticamente confirmándose un acto nulo, pues si plantea la nulidad fuera del plazo, deducida la prescripción y amparada la misma se dará la conclusión del proceso y en consecuencia el archivo del expediente.

El actual Código Civil buscó acortar de forma considerable el plazo de prescripción para la acción de nulidad a diez años conforme al inciso 1 del artículo 2001, es decir que, vencido dicho plazo no se puede accionar porque el plazo señalado no lo permite, trayendo como consecuencia muchas injusticias con la confirmación automática del acto nulo.

1.1.2. Formulación del Problema

¿De qué manera la prescripción extintiva del acto jurídico nulo vulnera las garantías al debido proceso?

1.2. Justificación e Importancia del Estudio

1.2.1. Justificación del Estudio

La validez de toda investigación se basa en el porqué de su realización, por ello, es que se establecen tres tipos de justificaciones a fin de estudiar la sustentación de las razones por las cuales se llevó a cabo este trabajo desde ciertos puntos de vista jurídicos y/o judiciales.

Como punto inicial se opta por tomar una justificación de tipo doctrinaria, la cual se desarrollará ubicando y seleccionando la doctrina referente a la prescripción extintiva del acto jurídico nulo, conforme a esta, se pretende buscar soluciones alternas para los cuestionamientos de los cuales derivan las garantías al debido proceso en la prescripción extintiva del acto jurídico nulo.

Posteriormente se da a conocer la justificación legislativa del trabajo, esto propicia un estímulo a desarrollar la proyección de este. En síntesis, el objetivo se basa en realizar una respectiva verificación sobre si existe una vulneración a las garantías al debido proceso en la prescripción extintiva del acto jurídico, y si este permanece en un estado de regulación bajo la normatividad en vigencia.

Se hace de manifestar además la justificación social característica de la investigación, puesto que en concreto se está tratando aspectos de una realidad, específicamente dentro de los ámbitos constitucionales y jurídicos a momento de llevar a cabo algún tipo de proceso.

1.2.2. Importancia del Estudio

Se considera la importancia en este trabajo debido al carácter trascendental que lo define. Puesto que deben contemplarse las garantías como algo sumamente indispensable para poder ejecutarse el proceso. Además de lograr darse a conocer la existencia de una posible vulneración a las garantías al debido proceso.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Poner en evidencia que la nulidad establecida para el acto jurídico prescrito para los diez años, habiendo estado estipulada en el primer inciso del artículo 2001° del Código Civil que regula, vulnera las garantías al debido proceso.

1.3.2. Objetivos Específicos

- ✍ Describir la prescripción extintiva de la nulidad del acto jurídico.
- ✍ Describir el debido proceso.
- ✍ Proponer la derogatoria y reforma del Código Civil, a fin de lograr el acatamiento de nulidad del tratado acto el cual prescribe a los diez años.

1.4. Hipótesis

Si, la aplicación de la prescripción extintiva de la nulidad del acto jurídico vulnera las garantías al debido proceso.

1.5. Variables

1.5.1. Variable Independiente

Prescripción Extintiva de la Nulidad del Acto Jurídico.

1.5.2. Variables Dependientes

- Vulneración a las Garantías al Debido Proceso.

1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección

1.6.1 Métodos

El desarrollo de este tipo de investigaciones concentradas en el esquema no experimental, buscan su argumento, para el caso jurídico, en la recopilación de información que se relaciona con la doctrina y la teoría del derecho que permita servir de base a la propuesta como solución al problema, por lo mismo tal recopilación de información ha de estar lo suficientemente ordenada y sistematizada, para lo cual se recurre a la utilización de los métodos científicos relacionados con el Derecho como ciencia; así la metodología empleada en el siguiente trabajo permitirá en concreto, el desarrollo de la observación a través de

un proceso detallado, idóneo y organizado. Es entonces que se opta por aplicar los siguientes métodos:

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico

Es importante tener en cuenta el hecho de que para el desarrollo de la interpretación de las reglas se utilizan básicamente dos caminos, el primero es el exegético jurídico y el segundo esta constituido por sistemático; así pues en este ítem se explica el hecho de que la información que se ha de recoger será de un corte particular, esto es que el análisis de la regla se hará desde un punto de vista gramatical para que en función a tal examen de su literalidad se pueda reconocer el sentido que se ha pretendido dar con su construcción por parte del legislador.

Resultando de mayor utilidad en cuestión de la interpretación de la doctrina y las normativas clasificadas con relación a la vulneración a las garantías al debido proceso en la prescripción extintiva del acto jurídico nulo, teniendo esta que confrontarse contra la realidad, obteniendo de este modo las cifras como resultados, de los cuales se partirá para contrastar la hipótesis planteada.

1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico

La comprensión de la interpretación de la regla en este método es la ubicación de la misma en el esquema del ordenamiento jurídico, así se constituye un examen que prevé su comportamiento y encaje con las reglas que la circundan, para este caso las que corresponden al ordenamiento civil.

Utilizado con la finalidad de concretar un análisis global y relacionado con el ordenamiento jurídico planteado, de este modo, se logra aproximar a un concepto de mejoría en la conclusión en la investigación.

De otro lado esta interpretación de la regla prevé un examen en función a la normatividad vigente, esto es la consolidación de su estructura en base a las reglas que se incorpora en la Constitución en tanto principios, aspecto elemental que permite su acogimiento y ejecución.

1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo

La observación de la realidad se hace en esta investigación desde dos planos uno que se refiere a la hipótesis deductiva que se proyecta de lo general a lo específico y otra que se enmarca en el método inductivo que observa de manera inversa; para este caso se ha considerado prudente la utilización en primer lugar del método deductivo que proyecta una afirmación hipotética en base al inicio del análisis de un aspecto general que es la norma en sí como regla que sienta la base para la concepción del acto jurídico, la nulidad y sus elementos o requisitos y con ello la expectativa de protección de las garantías del debido proceso.

Este método fue de vital utilidad a momento de crear la conjetura inicial, y durante el desarrollo del trabajo sirvió para el adecuado estudio de este, abordando temas que tratan desde su naturaleza hasta manifestaciones específicas para casos en concreto.

1.6.1.4. Método Inductivo

Su aplicación pudo concretar el análisis del material de estudio utilizado para esta investigación, además de poner en evidencia la hipótesis y la elaboración de las conclusiones y las recomendaciones finales.

Ello en razón de que el examen parte de la consideración específica o particular de la ejecución de las garantías que corresponden al debido proceso, respecto a la aplicación de las reglas del acto jurídico en tanto ese sea considerado nulo por lo que partiendo del examen de la situación particular, se ha podido evidenciar las características o factores que provocan la vulneración de las garantías, para poder argumentar con ello los cambios legislativos que a nivel general habrán de aplicarse.

1.6.2. Técnicas

Las técnicas empleadas fueron en base a recopilación y adjunción de datos informativos, los cuales permitirán establecer los parámetros para la definición de la propuesta, lo cual a su vez desarrolla el planteamiento de las propuestas finales en relación con los resultados, validando así el propósito de la tesis.

1.6.2.1. Análisis Documental

Para ejecutar el análisis mencionado, se tuvo que emplear el uso de fichas tanto bibliográficas como documentales, mismas que sirvieron para obtener información

específica dentro del área de derecho civil, en específico, con relación al tema de la prescripción extintiva del acto jurídico nulo.

1.6.2.2. Observación

La guía de observación fue utilizada para llevar este proceso tal cual dentro de la investigación, se hace énfasis en un contexto real de tipo jurídico-social, mismo contexto que abarca la prescripción extintiva.

1.6.2.3. Informática Jurídica

Se utilizó como método instrumental la computadora para realizar diversas investigaciones que pudieran permitir una visión más amplia y globalizada de los aspectos que abarca el tema de investigación; en ese sentido se buscó opiniones de carácter doctrinario y jurisprudencial.

1.6.2.4. Entrevista

Se optó por entrevistar a determinados agentes activos en el contexto donde se desarrolla el tema tal cual, siendo estos jueces y abogados especialistas en derecho civil. Es a través de una recopilación de opiniones y posturas de estos conocedores, con relación a la problemática tratada, que se concretará esta sección del trabajo siguiente.

1.6.3. Instrumentos

En primera instancia es prudente señalar la definición de los instrumentos dentro de la investigación realizada. Siendo entonces medios auxiliares para utilizar en la recopilación y consignación de la información a plasmar en la investigación por medio de ciertos procedimientos.

1.6.3.1. La Ficha

Utilizado en la técnica del fichaje, fue de utilidad en cuanto respecta a la localización de fuentes y almacenamiento de datos obtenidos conforme se desarrollaba el trabajo.

1.6.3.2. La Guía de Observación

Este instrumento pudo ser utilizado a momento de realizar la técnica de observación, y a su vez para realizar una observación de tipo directa en el objeto materia de investigación.

1.6.3.3. La Guía de Entrevista

Consistió plenamente en el conjunto de diálogos que se llevaron a cabo con las personas tratadas especialistas en el tema, con el objetivo de orientar de un modo óptimo y eficaz el desarrollo de la investigación y validar el propósito del este.

CAPITULO II

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO

2.1. Prescripción

2.1.1. Generalidades

Puede referirse a dos conceptos en específico si se trata el tema de prescripción, siendo estos tal cual el espacio y tiempo. Siendo el primer término definido como aquel sitio, ambiente, vacío o lugar el cual un cuerpo es capaz de ocupar. Seguidamente se opta por definir al tiempo, teniendo múltiples concepciones, interpretado tanto como el componente dinamizador por excelencia y el cual permite que el cambio permanezca, o también siendo entendido como la interpretación subjetiva del desgaste de los cuerpos. Tomando como base lo último mencionado, se puede establecer una relación con el tema tratado, siendo que la prescripción extintiva es un plazo limitado en el cual se puede iniciar cualquier tipo de acción en el ámbito jurídico.

En cuanto a su génesis, se toma en cuenta el dictamen establecido por los romanistas, los cuales indican, tomó inicio en el Derecho Romano. Señalado así también por el maestro Fernando Vidal Ramírez (2013), en su publicación titulada: *Precisiones en torno a la Prescripción Extintiva y a la Caducidad*, que refiere que sirvió:

Como el medio de defensa que podía oponerse a las *actio in rem* con finalidad usucupatoria o a las *actio rei vindicatio*, en ambos casos por el poseedor que por tiempo prolongado venía detentando el bien. Tomó el *nomen iuris* de *praescriptio* porque figuraba en el encabezamiento de la fórmula con la que se formalizaba la *litis contestatio*. Además, el Pretor tomaba conocimiento de las cuestiones que debía resolver en ejercicio de su *iurisdictio*, lo que evidencia su origen como oponible a las *actio* con una finalidad extintiva (pág. 121).

Se afirma que el derecho es inajenable al curso natural cronológico y responde a diferentes necesidades según la persona lo requiera. En síntesis, estas necesidades varían según las circunstancias y el desarrollo del tiempo, por lo cual cada derecho responde por efecto de este.

El doctor Gonzáles (2007), quien en el trabajo desarrollado bajo el título: “*Derecho Civil Patrimonial: Derechos Reales*”, expresa: “El derecho y la ley están sometidos al fenómeno fáctico del tiempo, el derecho en su desarrollo evolutivo, la ley en su vigencia y aplicación” (pág. 367).

En síntesis, se establece la distinción entre ley y derecho en base a contextos temporales diferentes. En primera instancia se tiene a la doctrina del derecho carece de principio y fin, mas no significa que se encuentre ajena al cambio, puesto que conforme los años pasen, se suscitarán manifestos que desencadenen una serie de procesos que a su vez permitan la evolución de esta ciencia. Por otra parte, se tiene a la ley, la cual tiene una existencia limitada, un período el cual consta desde la promulgación y vigencia de esta hasta su derogación o modificación.

La dinámica temporal se ve reflejada en los siguientes manifiestos y/o actos jurídicos, los cuales son: la prescripción, caducidad y los plazos. Tratando en esta oportunidad durante la investigación sólo la primera señalada.

2.1.2. Concepto

Etimológicamente partiendo del latín *praescriptio*, la palabra tal cual posee polisemia, sin embargo, bajo este contexto jurídico puede definirse como la iniciativa de algo durante el curso temporal. La prescripción se encuentra originada en el derecho romano.

Dentro del Libro VIII del Código Civil vigente se indica tanto el concepto de prescripción como el de caducidad como fenómenos extintivos: El primero es señalado como “la acción, pero no el derecho mismo” – estipulado en el artículo 1989 –; mientras que el segundo es indicado como “derecho y la acción correspondiente” – estipulado en el artículo 2003 –. Siendo entonces en ambos casos, efecto extintivo. Este efecto tal cual aparentaría ser inducido debido a la “inacción” por parte de quien tuvo que “actuar” en ciertas circunstancias y momentos, mas no lo hizo. De este modo, se logra identificar la verdadera distinción entre ambos términos, siendo que no es lo que logra extinguirse tal cual, sino la forma en cómo se lleva a cabo tal extinción.

Puede definirse a la prescripción como: “(...) un medio o modo por el cual en ciertas condiciones el transcurso del tiempo modifica sustancialmente una relación jurídica”. (Vidal Ramírez, 1985, pág. 83). Partiendo de esto, se puede inferir que

la prescripción actúa como un instrumento donde el tiempo se ve alterado o cambia una situación jurídica específica, en beneficio o perjuicio.

Se añade el aporte del profesor Nerio Gonzáles Linares (2007), quien expresa lo siguiente:

En toda definición legal o doctrinal de la prescripción debe estar siempre presente el elemento tiempo como el contenido fáctico y vital del derecho que genera su mutación o cambio (en las relaciones jurídicas y los plazos), produciendo efectos jurídicos concretos. Se puede decir también que la prescripción es el medio de determinar el transcurso del tiempo, trasuntado jurídicamente en el plazo legal que da nacimiento a la usucapión como el modo originario de adquirir la propiedad, o la liberación o extinción de obligaciones. Mientras la primera tiene funcionalidad en los derechos reales, la última opera en los derechos de obligaciones o de crédito (págs. 369 - 370).

Se cataloga al aspecto temporal como aquel dinamizador y circunstancia que transforma de manera suprema. Permite que los acontecimientos o situaciones jurídicas encuentren variantes en medio de distintas circunstancias donde la persona puede encontrarse. De no ser así, esta persona se vería implicada en una obstrucción tanto de sus beneficios como perjuicios permanentemente.

Seguidamente, se colige que la prescripción es el medio por el cual se pueden tanto obtener como perder derechos y la capacidad o el chance de ejecutar acciones con relación al plazo legal establecido por la normativa jurídica, conservándose con el único propósito de evitar que la carga se vuelva permanente. Es entonces que se infiere además que existe tal cual una definición añadida basándose en los modos de adquisición y extinción de estos derechos, referido al primer punto en la prescripción del tipo usucapión y el segundo a la de libertad o extintiva.

Generalizando, la prescripción halla su significado concreto en el origen o término de acciones civiles y/o jurídicas a través del curso cronológico natural.

2.1.3. Fundamentos

Toda institución jurídica, tal cual es también la prescripción, se sostiene en fundamentos y razones, que permiten, opere adecuadamente. Sirviendo esto de sustento para esta sección del trabajo, se tiene la siguiente cita en la cual se destaca la acotación del profesor Nerio Gonzáles Linares (2007), quien refiere que: “La prescripción como se viene estudiando de manera general, o sea involucrando ambas especies prescriptoras, encuentra sus fundamentos en las razones siguientes” (págs. 376 - 377):

Dada entonces la cita previa, se pueden añadir ciertos puntos con relación a la misma. Con el objetivo de realizar una demostración plena de los sustentos que posee la prescripción y además de poder demostrar los efectos que tiene sobre la sociedad.

Teniéndose en primera instancia, se toma en cuenta el interés elevado por parte del Estado por inhibir situaciones que sitúen a la sociedad en una posición de inseguridad, por lo cual, este establece una armonía entre los intereses tanto de tipo público como privado.

Añadido a ello, se considera como uno de los principales propósitos de la prescripción lograr el sosiego del acreedor o la persona a quien se le brindará el servicio correspondiente respecto al reclamo de sus obligaciones frente al deudo.

Este reclamo podrá llevarse a cabo siempre y cuando se compruebe el respectivo desinterés por parte del titular o poseedor original del derecho real, de ser así, se comenzará a ceder todos los bienes muebles e inmuebles de este al próximo poseedor, con las prerrogativas dictadas previamente por el propietario inicial.

La prescripción extintiva, como tal, también basa su fundamento en aspirar la estabilidad y seguridad entre relaciones humanas dentro del ámbito jurídico, con el fin de evitar circunstancias de inseguridad, mismas circunstancias las cuales debieran salir del marco de la indefinición temporal. Lo cual deberían terminar o desaparecer al aplicarse el “plazo prescriptorio” según corresponda de acuerdo al tema que se este ventilando como conflicto en el proceso civil.

A su vez, se dirige esto al sentido de la sociedad en general, validando el sentido del anhelo a la consolidación y perfección de la propiedad como derecho, siendo su ejercitado de manera eficaz y directa, pacífica, real y desde luego pública como carácter de lo que se entiende por el derecho del poseedor, de acuerdo al espacio de tiempo que se establece en el ordenamiento jurídico. Lo cual cambia la circunstancia posesoria para convertirse en la propiedad por adquisición.

Sin embargo, como fundamento principal y el cual abarca ámbitos generales dentro de lo que consiste la prescripción, está el superior interés por parte de la sociedad, “la cual exige un fin para todas las situaciones y relaciones jurídicas que se mantienen en el tiempo denotando inseguridad, incertidumbre, inestabilidad o zozobra; circunstancias que afectan a los grandes fines del derecho como la justicia, la seguridad, la paz, el bien común, etc”. Siendo estos en concreto, valores

constituyentes e inherentes al derecho, los cuales están predestinados a consolidar instituciones jurídicas propias de la doctrina.

Por último, se tiene que la prescripción es de gran contribución respecto a las relaciones tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, sosteniendo así el objetivo de asegurar la paz social entre las personas.

Acotando el análisis de la doctrina, propia de la prescripción extintiva, se pueden desprender de esta, dos tipos de fundamentos aparte de los tratados previamente, una mantiene un enfoque a desde una perspectiva objetiva, y la otra desde una subjetiva. Consistiendo entonces la primera en el presunto retiro del titular del derecho; la segunda, en la búsqueda por establecer relaciones jurídicas seguras.

Además, el fundamento perteneciente a esta institución consiste plenamente en evitar la permanencia de vinculación entre “las relaciones jurídicas y las partes involucradas, posibilitando que se interpongan procesos en cualquier momento”, creando incertidumbre en la sociedad sobre la titularidad de sus derechos.

Si uno de los objetivos esenciales del derecho es lograr la paz a nivel social, el orden público y la seguridad jurídica, que se encuentran vinculados, podrán concretarse en la sociedad mediante la institución de la prescripción. Basándose en un contexto presto a la subjetividad, determinados sectores sociales por naturaleza necesitan de un regimiento o una normativa que establezca el orden dentro de estos, es por ello por lo que se destaca la importancia de tratar la prescripción en la presente investigación. Generalizando, entonces, la razón de ser debe buscarse en exigencias de orden social.

Tomando este sentido, se tiene la siguiente acotación indicada por Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre, durante el desarrollo de la publicación titulada: *Todo Prescribe o Caduca, a menos que la Ley señale lo contrario*, donde se indica:

En efecto, es socialmente útil, en interés de la certeza de las relaciones jurídicas, el que un derecho sea ejercitado; de manera que, si no es ejercitado durante cierto período notablemente largo, en el cual todavía podía ser ejercitado, debe considerarse como renunciado por el titular. Entonces, como conclusión, podemos decir que todo aquello que no prescribe o que, supletoriamente, no caduca, está señalado específicamente con tal carácter en esas siete normas del Código Civil Peruano (Osterling Parodi & Castillo Freyre, 2019).

El estado ha determinado plazos legales y transcurridos estos, manteniéndose el titular del derecho en estado de inacción, se castigará su negligencia, extinguiendo la acción, aniquilando toda protección legal a favor del titular del derecho en pro del interés público.

2.1.4. Clases

2.1.4.1. Prescripción Adquisitiva

Gonzáles (2007), señala en su libro: *“Derecho Civil Patrimonial: Derechos Reales”*: “La prescripción adquisitiva o usucapión está íntimamente vinculada a los derechos reales. Esta prescripción a su vez reconoce dos modalidades: la corta u originaria y la prescripción longi temporis, que corresponde a la prescripción larga o extraordinaria” (p. 370)

Dicho de otro modo este tipo de acto prescriptorio en el ámbito de lo adquisitivo explica la forma en que logra transformarse la posesión tal cual en el ejercicio real de la propiedad. Se establece una relación entre el proceso transformativo mencionado con los requisitos exigidos por la normativa que conlleva a utilizar dos tipos de modalidades, mismas que el autor expone.

La primera siendo llamada corta u originaria, consiste en poseer el presupuesto del “ejercicio real y objetivo de la posesión, el transcurso temporal de cinco años”, su respectivo “título” y a su vez debiendo ser de manera pacífica y en sector público.

Mientras que la segunda, llevando por nombre modalidad de tipo larga o extraordinaria, se encuentra en el deber de exigir el ejercicio real y objetivo de la posesión implicada y a diferencia del anterior, este conlleva un “transcurso temporal consistente de diez años, sin requerimiento de un justo título”, siendo probablemente de dudosa confianza, pero aún así debiendo darse de manera pacífica y pública.

Es decir, es un medio de adquirir la propiedad, ya sea de un bien mueble o inmueble, por el transcurso del tiempo, es por ello que la pretensión procesal es declarativa, pues busca el reconocimiento de un derecho.

Como requisitos, dicha posesión se deberá ejercer de manera pacífica, haciendo referencia a que el poseedor no debe adquirir por vías de hecho, como violencia, amenaza o intimidación, la calidad de poseedor; continua es decir que no haya existido ninguna interrupción natural o jurídica y pública, manifestada a través del conocimiento público de la efectividad de la posesión.

Existen determinados supuestos sobre los cuales es improcedente la prescripción adquisitiva y son aquellos supuestos el que no se posee con calidad de propietario, sino con la calidad de poseedor inmediato.

Por otro lado, la ley ha determinado que existen determinados bienes imprescriptibles como son los bienes de dominio público, cabe resaltar que no se deberá confundir bien de dominio público con bienes del Estado. Ahora bien, el derecho no solo ampara al poseedor de buena fe, sino también a aquel que no cuenta con esta, dado que el plazo para adquirir un bien inmueble vía usucapión, será de 5 años, si el poseedor cuenta con justo título y buena fe; mientras que el poseedor que no cuente con justo título ni buena fe, deberá esperar 5 años más a fin de beneficiarse con la prescripción adquisitiva.

Tratándose de bien mueble el poseedor de buena fe, podrá adquirir la propiedad dicho bien al transcurrir 2 años, mientras que el poseedor de mala fe adquirirá la propiedad a los 4 años.

2.1.4.2. Prescripción Extintiva

Como primer punto, se toma la ubicación estructural de dicha prescripción. Situándose en las reglas del “Código Civil vigente en libro VIII”, Título I entre los artículos 1989 al 2002.

Tratándose fundamentos plenamente subjetivos, se habla específicamente de la denominada presunción *iuris tantum*, misma que exige la existencia de una prueba, mediante la cual, se indique el abandono del derecho por parte del titular.

Es gracias a esto por lo cual se hace notar la utilidad de “la naturaleza jurídica, propia de la prescripción extintiva, a través de la excepción”. Dándose así, tal circunstancia hacia la el demandado en razón a la carencia de actividad que le corresponde como propietario respectivo. Esto tendrá un mayor enfoque y desarrollo en posteriores puntos de la investigación presente.

El efecto que ejerce el transcurso del tiempo sobre la toma de acciones puede resultar decisivo, debido a que se modifica la situación patrimonial jurídica establecida entre los sujetos implicados. En razón, además, de que cualquiera de los ya mencionados están en la posibilidad de liberarse del accionar, provocando la oposición de la prescripción. “Este tipo de prescripción extingue la acción, mas no el derecho, tal cual se establece en el artículo 1989”.

Cabe resaltar la siguiente precisión, en la cual se da a conocer que el Código Civil no concibe distinción alguna entre el derecho y la acción, estableciendo que “la acción, o derecho de hacer valer el derecho, no es más que el derecho mismo hecho valer; por lo tanto, el derecho asume una postura defensiva. Por ende, se concluye que “cada acción presupone un derecho”, “no hay acción sin derecho”, sin embargo, puede existir el derecho sin la acción.

Por lo cual es necesario precisar a qué se denomina acción, a fin de marcar una diferencia clara con respecto a la caducidad. En doctrina se admite que la acción es

un derecho público, subjetivo, abstracto y autónomo. El derecho de acción permite exigir al órgano jurisdiccional la tutela de un derecho que es materia de controversia o de incertidumbre jurídica. El derecho de acción como categoría procesal, es válido para ejercer la protección de cualquier derecho.

El tema tratado en la investigación se relaciona directamente con el curso temporal, puesto que este último es quien define su ejecución. Entre diversos autores que plantean la relación proporcional existente entre el tiempo y la prescripción extintiva se encuentra Messineo (1954), quien en su publicación titulada: *Anual de Derecho Civil y Comercial*, puntúa este término como “un evento vinculado con el paso del tiempo. Desde esta perspectiva lo define como el modo o medio con el cual, mediante el transcurso del tiempo, se extingue y se pierde un derecho subjetivo por efecto de falta de ejercicio” (pág. 610).

En virtud de su oposición, es decir, cuando se plantea excepción por prescripción extintiva, no se extingue el derecho sustancial del demandante, como sucede en la caducidad, sino la acción emergente de él, y, segundo, que la excepción de prescripción extintiva por naturaleza propia es una figura procesal y no debe ser confundida con la institución que le sirve de presupuesto, la cual, si es de carácter sustantivo, no obstante, los innegables efectos procesales que nacen de ella.

Se tiene que la prescripción consiste en una figura jurídica, la cual implica para ser llevada a cabo un proceso, y como tal, todo proceso conlleva requisitos para ejecutarse, siendo estos planteados por Nicola Coviello (2017); en su obra, cuyo título permite previsualizar aspectos que acapara la ciencia que se encarga de

estudiar, precisamente, este tipo de casos dentro del ámbito jurídico. Siendo este entonces *Doctrina General del Derecho Civil* donde se indican las siguientes estipulaciones: i) Un derecho existente para el ejercicio real. ii) Inactividad o inercia propia del titular, y iii) El transcurso del tiempo señalado por la ley, y que varía según los diversos casos (pág. 492).

Ugo Rocco (1969), quien en su libro titulado: *Tratado de Derecho Civil*, atendiendo al carácter ideal y a la naturaleza del derecho de acción concluye sobre la imprescriptibilidad:

Mientras dura pues la norma procesal que reconoce a todo sujeto de derechos la facultad de pretender la prestación de la actividad jurisdiccional; mientras dura la necesidad, y por tanto, el interés en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, tiene que existir necesariamente también esa facultad reconocida por el derecho procesal. Y esto por la sencilla razón que, en todo momento de su existencia, todo sujeto de derechos, es decir, todo hombre, encuentra en la ley la fuente perenne que le garantiza el ejercicio de sus derechos, ya que es de interés general que cada uno pueda pretender del Estado, dentro de los límites establecidos por las normas procesales, el ejercicio de la función jurisdiccional (págs. 370 - 371).

2.1.4.3. La Prescripción se deduce a Pedido de Parte

Si bien el transcurso del tiempo constituye factor sustancial no es suficiente para que el sujeto pasivo de la relación jurídica se beneficie de repercusiones ejecutadas por la prescripción extintiva, requiriéndose entonces, que este llegue a invocarla, ya que el juez está impedido de fallar invocando de oficio la “prescripción extintiva”. El código Civil en su numeral 1989, señala que “se puede extinguir la acción mas no el derecho”, por ello, al titular del derecho en vía judicial se le abre la posibilidad

de declarársele infundada su demanda, siempre que esta haya sido alegada por el demandado, ya que en concordancia con el artículo 1992 del Código Civil, el juez no puede fundar sus fallos en la prescripción no alegada.

A fin de que la prescripción extintiva produzca sus efectos se precisa que la parte que desea beneficiarse con la prescripción, la parte exceptuante, manifieste su voluntad.

Quien mantenga interés en alegar o invocar el ejercicio de la prescripción puede valerse del mismo. Dicho esto, se puede plantear la perspectiva estructural, la cual señala que la prescripción puede constituir una delimitación respecto al ejercicio del derecho subjetivo. Cabe señalar que todo derecho debe ser ejercido dentro de un plazo previamente establecido con carácter racional, pues se considera antisocial el mantener dentro de la inercia el ejecutar una acción jurídica. El titular tiene la carga de un ejercicio tempestivo de su derecho. Así las cosas, en razón de la inacción del titular del derecho que pudiendo hacerlo valer no lo hace, pierde la facultad de exigirlo compulsivamente.

Lo que hace a la prescripción extintiva particular es que su alegación no lo es respecto de un hecho extintivo acaecido con anterioridad al proceso, sino aquella que es en sí misma fuente del efecto extintivo, vale decir, que es el modo usual del ejercicio del poder de provocar la consumación del fenómeno prescriptorio, circunstancia esta que por sí sola no la convierte en un fenómeno procesal, sino más bien en un fenómeno sustancial que se perfecciona a nivel procesal.

A fin de perfeccionar la institución de la prescripción extintiva, esta, dentro del proceso se planteará, tal cual se encuentra establecido en el artículo 1993 del Código Procesal Civil: dentro del plazo previsto para cada procedimiento. Además, hay que tener en cuenta que cualquier pacto con el propósito de producir la prescripción extintiva es nulo.

2.1.4.4. Renuncia de la Prescripción Ganada

Ahora bien, el sujeto sobre el que recae alegar la prescripción extintiva, pese a haberla ganado -por el transcurso del tiempo-, puede optar por renunciar a esta ya sea de manera expresa o tácita, estipulado en el artículo 1991 del Código Civil: “Puede renunciarse expresa o tácitamente a la prescripción ya ganada”.

El derecho de prescribir es irrenunciable por ser la prescripción de orden público, así el artículo 1990 manifiesta que cualquier renuncia anterior al vencimiento establecido por ley resulta ineficaz. Las normas de manera imperativa tutelan un derecho por un plazo estipulado legalmente, el que, a su vencimiento, la parte pasiva de la relación jurídica puede optar por favorecerse o renunciar a la prescripción. Sin embargo, llegada la prescripción extintiva prescrito y como consecuencia haberse extinguido la acción.

Como se puede apreciar la norma hace referencia a una prescripción ganada, es decir que haya finalizado el plazo legal para que el titular de la acción haga a esta efectiva en un proceso legal.

Hasta este punto de la presente investigación se ha desarrollado tanto el proceso, la validez y en qué consiste tal cual la acción de prescripción extintiva; sin embargo, como toda acción jurídica, puede si bien tomarse y darse la ejecución de esta, a su vez también puede presentarse una renuncia. Consiste plenamente en un acto jurídico unilateral declarativo, pues en sí, toda persona que quiere beneficiarse con la prescripción manifestará su voluntad ante el titular del derecho reconociendo así un derecho previo a la prescripción.

Las formas de manifestar la renuncia se pueden llevar a cabo de dos maneras, siendo tanto de la forma expresa o tácita. Por un lado, la expresa podrá ser de manera oral, escrita o a través de otro medio directo, es decir, será válida bajo cualquiera sea la forma que se emplee y asimismo serán ilimitados los medios para probarla, mientras que la renuncia tácita resultará de la ejecución de un acto incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción.

Partiendo de ello, el efecto inmediato de la prescripción consiste en que la obligación civil deviene en una obligación natural, no siendo por tanto pasible de ser exigida, más sí susceptible de ser cumplida por el deudor natural, el mismo que de efectuar el pago no tendrá derecho a la repetición de lo pagado, pues el derecho del acreedor —quien ya no puede exigir el cobro de su acreencia— subsiste.

2.1.5. Plazos Prescriptorios

El objeto de la prescripción son las acciones de contenido patrimonial, en su mayoría, estableciendo el Código Civil que estas de manera general, prescribirán a los 10 años.

Por otro lado, dado el principio de legalidad, las acciones imprescriptibles, están señaladas en el Código Civil de manera explícita, dichas acciones se presentan como la de filiación, la petitoria de herencia, de nulidad de la partición por preterición de un sucesor, y la reivindicatoria. La imprescriptibilidad de estas acciones se sustenta en su importancia y en su materia, siendo oponibles a la excepción de prescripción.

Cabe resaltar que en concordancia al artículo 2000, el plazo de prescripción extintiva es indiferente al tipo de persona, y por ello el código civil prescribe lo siguiente en su artículo 2497: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

El cómputo del decurso prescriptorio inicia desde el día en que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación hasta el último día señalado por ley para cada uno de los distintos derechos. Dicho cómputo se realizará por días enteros, debiendo entenderse como último día al día integro de 24 horas, el que finalizará a las 12 de la noche en punto, y no de momento a momento, ya que se realizará una *computatio civilis*. Se añade que el artículo 83 inciso 5 indican lo siguiente respecto al plazo:

siendo cuyo último día inhábil, que puede ser un sábado, domingo o feriado, vencerá el día hábil siguiente.

Se tienen por ende casos especiales en los cuales se cuestiona la aplicabilidad de la prescripción extintiva, o en su defecto, la alteración del decurso prescriptorio, siendo entonces uno de ellos uno en el cual una vez se haya iniciado contra el titular del derecho, si en caso este muriese, es oponible a sus sucesores, ya sea a título singular o universal, sin que la muerte de aquel implique la suspensión o interrupción de la prescripción. Así en virtud de la *accessio temporis* se adiciona el tiempo que debe pasar para que opere la prescripción, de tal manera que producido el deceso del titular del derecho continua su curso de prescripción, esta vez en oposición a sus sucesores.

Hállese registrado en el “Código Procesal Civil” artículo 196, se dispone: “la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos”, a partir de lo antes mencionado, se colige que la parte pasiva de la relación jurídica, es decir, el excepcionante, quien deberá acreditar que sobre el derecho invocado en la demanda existe la excepción de prescripción extintiva. Ante ello podrá ofrecer como medio probatorio todos aquellos que acrediten que la fecha inicial del curso de la prescripción es anterior al día alegado por la contraparte, y que además puede acreditar la inexistencia de una suspensión o interrupción, por lo cual el plazo del decurso prescriptorio no se ha extendido; sin embargo, si este no presentara medio probatorio alguno, el excepcionado podrá simplemente negar lo alegado por el excepcionante.

2.1.5.1. La Interrupción y la Suspensión

La interrupción se da cuando el derecho, luego de un periodo de inercia de parte de su titular, viene nuevamente ejercitado. Inicia, así, a correr un nuevo periodo de prescripción sin tener en cuenta a fines del cómputo, el tiempo precedente.

Es decir, después de haberse tomado la acción jurídica inicialmente, abandonarla, para posteriormente ser retomada aun sin considerar el tiempo transcurrido, se toma en cuenta un nuevo plazo reiniciando el ejercicio de la prescripción tal cual.

Dicho esto, el transcurso de la prescripción podrá verse afectado por una acción, ya sea por parte del titular del afectado o de su contraparte, con lo cual al cese de estos hechos se reiniciará el computo del plazo estipulado por ley para el ejercicio del derecho al que se refiera.

Así, se han establecido como causales de interrupción, en estricta relación a lo establecido en el “Código Civil” específicamente lo incorporado en el artículo 1996, los siguientes:

1. El reconocimiento de la obligación.
2. La intimación para constituir en mora al deudor.
3. La citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente.
4. El oponerse judicialmente a la compensación.

Con respecto a la segunda causal, esta es exclusiva de los derechos de crédito y tiene como único fin que el acreedor vea satisfecha su pretensión, es decir que el deudor cumpla con ejecutar el pago efectivo de la deuda. El acreedor interpelara al deudor, es un acto de voluntad potestativo destinado al cumplimiento de la obligación.

Dicha intimidación podrá ser judicial o extrajudicial, siendo que el decurso prescriptorio se verá interrumpido cuando el deudor tome conocimiento de la intimación, y ante el incumplimiento de este el plazo de prescripción iniciará nuevamente.

La suspensión del decurso prescriptorio se origina por causas sobrevinientes a la acción, y siempre será ajeno a la voluntad de las partes, dicho supuesto suspensivo previsto por ley detiene el cómputo del plazo, reiniciándose este una vez culmine dicho supuesto.

En el Código Civil se muestran taxativamente las causales de suspensión prescriptiva, dadas entonces en el siguiente orden: “I) Cuando los incapaces no están bajo la guarda de sus representantes legales. II) Entre los cónyuges, durante la vigencia de la sociedad de gananciales. III) Entre las personas comprendidas en el artículo 326. IV) Entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o tutela. V) Entre los incapaces y sus curadores, durante el ejercicio de la curatela. VI) Durante el tiempo que transcurra entre la petición y el nombramiento del curador de bienes, en los casos que procede. VII) Entre personas jurídicas y sus

administradores, mientras estos continúen en el ejercicio del cargo. VIII) Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano.”

2.2. Nulidad del Acto Jurídico

2.2.1. Definición

La nulidad es una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico, en virtud de una causa existente en el momento de su celebración. En otras palabras, viene a ser la suspensión de cualquier acto jurídico, de su ejecución tal cual. Puede producirse cualquier anulación de este si en caso presentase alguna incidencia dentro de los requerimientos establecidos o la carencia de alguno de ellos.

Para Fernando Vidal Ramírez (2016), quien en su libro titulado: *El Acto Jurídico*, señala que:

La nulidad viene a ser, entonces, una sanción legal, la máxima sanción civil, cuando el acto jurídico se celebra sin sus requisitos de validez, o cuando se celebra con perturbaciones o distorsiones, puesto que lo priva de su existencia, validez y eficacia (pág. 216).

Asimismo, según el autor Stolfi, quien es citado por Marcial Antonio Rubio Correa (2019), en su libro titulado: *“Nulidad y Anulabilidad. La Invalidez del Acto Jurídico”*, nos dice que: “es nulo el negocio al que le falte un requisito esencial, o bien sea contrario al orden público o a las buenas costumbres, o infrinja una norma imperativa” (pág. 21).

Teniéndose entonces dicha situación plasmada en el artículo V del Código Civil, se dispone lo siguiente: “es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres”.

Este es el límite a que el ordenamiento jurídico le pone al mundo de los actos jurídicos, que, bajo sanción de nulidad, los celebrantes deben acatar. Según el numeral 140 que se ubica en el ordenamiento civil peruano señala el hecho de con el fin de comprobarse si es válido o no todo acto jurídico del mismo se debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Agente capaz
2. Objeto física y jurídicamente
3. Fin lícito
4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad

Dichas estipulaciones se encuentran prescritas en la ley. Por ende, el acto jurídico es válido siempre y cuando los requerimientos mencionados se cumplan a cabalidad, de lo contrario, los efectos jurídicos esperados, no serán concretados.

Carlos Ferdinand Cuadros Villena (1996), quien en su libro titulado: *Acto Jurídico: Curso Elemental*, nos manifiesta que: “se denomina nulidad del acto jurídico su falta de eficacia jurídica. El vocablo nulidad lo utilizamos en su acepción más amplia, comprendiendo en ellas no solamente las formas de nulidad absoluta sino también las de nulidad relativa” (pág. 208).

Aunque la disciplina del derecho haya clasificado la nulidad desde dos términos, estos, no han sido aceptados por el sistema jurídico. Siendo entonces los únicos términos válidos la nulidad y anulabilidad. Los efectos tanto en la nulidad como en la anulabilidad difieren en relación con el tiempo que tome el acto jurídico en suspenderse o las causales que precisamente provoquen la cancelación del mismo; el indicar la terminología de ineficacia por invalidez se aplicaría únicamente en el ámbito de la nulidad, puesto que en la anulabilidad no se hablaría de esta como tal debido a que posee una naturaleza completamente diferente a la nulidad.

El profesor Guillermo Lohmann Luca de Tena (1994) lo expresa del siguiente modo en su libro titulado: *El Negocio Jurídico*, argumentando que: “la nulidad es el medio de que el derecho se vale para evitar males en algunos casos y atenuar en otros los efectos de los negocios inválidos” (pág. 524).

Sin embargo, si en caso se presentase la nulidad como mecanismo, pueden destacarse dos clases: preventivo y sancionador de actos. El primero se caracteriza por dar a conocer a los agentes implicados en el acto jurídico, que este debe ejecutarse bajo el regimiento de ciertos estándares o normativas impuestas por la ley. Por otro lado, el segundo implica la suspensión de la celebración del acto jurídico si en caso se presentase el incumplimiento de algún requisito que lo constituya como tal y reafirme su validez.

2.2.2. Características

Estas características como tal son el resultado de principios informantes referidos a la nulidad absoluta, indicándose en el artículo 220 del Código Civil: “La nulidad a

que se refiere el artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público. Puede ser declarada de oficio por el Juez cuando resulte manifiesta. No puede subsanarse por la confirmación”.

Del tenor del numeral 220 puede apreciarse la incorporación de ciertas características entre las que se describe nulidad absoluta, esto propiamente del acto jurídico nulo: “ El acto nulo lo es de pleno derecho; La nulidad puede ser alegada por cualquiera que tenga interés o por el Ministerio Público; Puede ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional; No puede subsanarse mediante confirmación”.

Es claro que la acción jurídica tratada, solo puede ejecutarse si se establece una concordancia legislativa en relación con alguna entidad del Estado.

2.2.2.1. El Acto Jurídico Nulo lo es de Pleno Derecho

Puede definirse a “la nulidad absoluta” como un derecho técnicamente inexistente, por ello no requiere de la ejecución de una sentencia tal cual. Siendo de tipo *ipso jure*, conlleva a que el acto jurídico sea de pleno derecho. Es por esto por lo que se da la necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional con el propósito de desaparecer la apariencia del acto. Se infiere entonces que aquel “acto nulo” carece de fortaleza que vincule y tampoco puede desplegar algún efecto eficaz.

Cuando el acto sea nulo, no es posible que algo se cree o modifique en relación con la situación jurídica, inclusive si es que se guardaba la pretensión de cambiar con la celebración del acto.

Según Nicola (2017), en su libro titulado: *Doctrina General del Derecho Civil*, expone que:

El efecto que se reconoce de la nulidad “ipso jure” entre los intervinientes que participan y concluyen el negociado que tiene el carácter de nulidad, sus causahabientes, actúan tal cual si dicho acto negocial aún no hubiese concluido, por lo cual ha de concebirse sólo aquella condición legal preexistente a aquel acto dejando de lado la posibilidad de acudir al juez (pág. 370).

Asistir a exponer el caso al magistrado no es de mayor necesidad requerida en tesis general. Sin embargo, en determinados casos es útil, en específico cuando uno de los herederos tenga el propósito de poner en ejercicio un derecho sobre la base del negocio jurídico nulo. El objetivo que guarda la acción no radica en concretar la anulación del negocio, si no de refutar lo que el oponente pretenda en tanto el fundamento jurídico como la obtención de la declaración de nulidad en vías de prevención. Se determina entonces que no es una acción de condenación, si no de declaración.

Si se parafrasea lo expresado por Stolfi, se obtiene lo siguiente: la persona que pretenda invalidar el negocio ejerciendo la acción, no puede invalidarlo tal cual, puesto que ya es nulo desde un principio, en consecuencia, sólo serviría para corroborar la invalidez de este.

Natural y absolutamente el acto jurídico es nulo, y no puede surtir efectos por ninguna de las partes, puesto que no puede dar pie a la ejecución de la situación jurídica, por ello puede aplicársele la máxima *quod nullum est nullum producit*

effectum. El autor Nicola (2017) indica que debe entenderse con determinadas restricciones para llevar a cabo la constitución de la denominada figura de la conversión. Es decir, con ciertos límites preestablecidos o normativas antecesoras, puede ejecutarse dicha acción mencionada. (pág. 368).

Por su parte Fernando Vidal Ramírez (1986), indicó en su obra titulada: *Teoría General del Acto Jurídico* lo siguiente:

El que el acto nulo lo sea ipso iure, es decir de pleno derecho, significa que no requiere de una sentencia judicial que así lo declare (...). El acto nulo no requiere de pronunciamiento judicial. Solo si una de las partes que la celebró pretende su validez, corresponderá al juez declararla, sin que la sentencia que reconozca la nulidad tenga un carácter constitutivo, sino meramente declarativo (págs. 511 - 512).

Los puntos tratados a destacar referidos a la cita mencionada son dos en particular; el primero tratando sobre la declaración del derecho pleno y el segundo dando a entender qué sentencia o penalidad se ha de dictaminar en cuestión de nulidad. Entendiéndose en pocas palabras, el primero vela por las partes que dan por terminado el acto que padece de nulidad; mientras que el segundo, por el tipo de veredicto con el que se pretenda concluir.

2.2.2.2. La Nulidad puede ser solicitada por cualquiera que tenga interés o por el Ministerio Público

Tratándose de consideraciones de orden público, la nulidad del acto jurídico puede ser solicitada tanto por quien tenga interés o por el Ministerio Público. Esto se encuentra establecido de manera explícita en su primera parte del numeral 220

incorporado en el ordenamiento civil peruano. Para efectos correspondientes en esta investigación, es conveniente analizar los alcances de dicha norma.

El fundamento en el cual se sostiene la nulidad del acto jurídico como causa de severidad, y el cual, goza de mayor importancia es el orden público tal cual. Del mismo modo se reconoce como factor de rigor la extensión de la titularidad.

Es gracias al interés público y a través de él, que todo acto que posee nulidad es ahora reconocible y perceptible ante la incumbencia de las partes implicadas además de quienes velan por el amparo de este interés o en su defecto, de las leyes.

La condición nula de carácter absoluto de cierto acto, será considerada y dicha a cargo de agentes que demuestren la intención del Fiscal. De una manera explícita se denota esto siendo explicado durante el párrafo inicial del artículo 220 manifestado en el Código Civil. Mas es de conveniencia, prestarse a la interpretación de la norma para lograr ser menester de sus alcances.

El interés presente en el artículo mencionado previamente viene a ser el mismo que se indica en el artículo VI del Título Preliminar correspondiente al Código Civil. Este artículo es el que se encarga de sustentar el requerimiento de legalidad para llevar a cabo una acción o contestar la misma reconocida en el ordenamiento procesal civil peruano considere además de lo establecido por el numeral IV del “Título Preliminar” respectivo, y cuya ausencia puede dar mérito para las respectivas excepciones de carencia de legitimidad para ejecutar la obra como quien demanda o como el demandado.

Cabe destacar que la acción de nulidad absoluta es completamente diferente a la acción de anulabilidad o anulatoria, debido a que puede entenderse la primera como aquella que puede ser iniciada por alguien que mantenga un firme interés que ha de ser lógicamente legitimizado, tal cual indica León (1991) en su obra titulada: *Tratado de Derecho Civil Peruano*, dicho interés deberá basarse en una relación o un escenario en el cual se vea prevista la norma del derecho subjetivo, es decir, un interés que guarde una protección jurídica. (pág. 321).

Por otra parte, puede concebirse la idea de legítimo interés en relación con la nulidad absoluta cuando este interés sea perteneciente a los agentes implicados, y además, a tercero tales como el Ministerio Público e incluso el órgano jurisdiccional que puede realizar la declaración de oficio.

Ahora bien, en este punto se tratan a las partes, mismas de las que no puede caber realizar algún tipo de distinción por ningún motivo ni por causales de nulidad; cabe recordar que el acto es ipso jure y el dictamen establecido es netamente de declaración. Este alegato de orden público aparte de sustentar a la nulidad absoluta también guarda la justificación de que cualquiera de las partes que pretenda accionar en nulidad puede transmitir a sus sucesores este derecho a la acción, bajo títulos tanto universales como singulares.

Son considerados terceros relativos los sucesores de las partes, por ello, también se encuentran legitimados para llevar a cabo la acción. Mas los terceros que no son sucesores, se encuentran en la incapacidad de ello por ser terceros absolutos, con excepción de los acreedores, que vendrían a ser terceros relativos también. Es

entonces que se debe ejecutar un análisis referido al tipo de interés que presente el tercero absoluto para con la acción, ya que la legitimidad presenta características de indispensabilidad en cuanto refiere el artículo 220, el cual a su vez es considerado requisito general teniendo en cuenta el artículo VI del Título Preliminar perteneciente al Código Civil y además por extensión, en el artículo IV de este mismo Título perteneciente al “Código Procesal Civil”.

Se entiende que el Ministerio Público ha de establecer cierto control, cuya función se encuentra establecida en la normatividad constitucional, tiene ciertas facultades para tal fin como lo es la garantía de cuidado sobre lo legal y velar por los intereses que están resguardados por el Derecho (artículo 159° del Código Civil, inciso 1), es preciso reconocer el ámbito de aplicación de este carácter de control, por lo mismo que hace falta revisar con cuidado las potestades que se le atribuyen a dicha entidad; así se encuentra en la “Ley Orgánica la defensa de la familia y de los menores e incapaces. Sin embargo, la misma Ley no le confiere como atribución expresa la de promover la acción de nulidad, ni la de emitir dictamen, según la instancia, cuando se trata de procesos cuya materia controvertida es la nulidad de un acto jurídico. Por ello, creemos que al Ministerio Público no le corresponde promover la acción de nulidad por todas las causales del artículo 29 del Código Civil, sino sólo por la causal de incapacidad absoluta (inciso 2) y en las nulidades textuales (inciso 7) y virtuales (inciso 8) que llegan a su conocimiento”.

Todo trámite que busca reconocer el sentido de nulo de cierto acto deberá ejercerse como proceso de conocimiento, ya sea promovida en función a los interesados, el tercero e incluso el Fiscal que tenga a su cargo este tipo de procesos.

Al respecto, el profesor Fernando Vidal Ramírez (1986), manifiesta lo siguiente:

El acto jurídico por constituir la expresión de la nulidad absoluta, que se sustenta en principios de orden público, puede ser alegado por quienes tengan interés o por el Ministerio Público (...). Pero hay que advertir que quien alegue la nulidad absoluta del acto, debe tener un interés jurídicamente protegido, es decir que no sea contrario al orden público o a las buenas costumbres (pág. 517).

Según lo visto aquello a lo que indica esta referencia es que, para realizar la solicitud de la pretensión ante algún Tribunal, se necesita tener la titularidad respectiva, esto quiere decir un interés tanto económico como ético, ello otorga el principio de interés público, el cual permite el acceso para actos particulares, aunque sus efectos afecten en cierta forma los bienes jurídicos sociales.

2.2.2.3. La Nulidad Absoluta puede ser Declarada de Oficio

La declaración de oficio de la nulidad absoluta, como se ha visto, sustenta el interés basado en el orden público. Manifiesta la validación del tipo de interés que se presente para llevar a cabo la nulidad tal cual. Por ello, esta característica se puede tratar como una consecuencia inherente a la nulidad ipso jure del acto nulo que, como hemos señalado, significa que no requiere de una sentencia judicial que la declare. Así resulta del segundo párrafo del artículo 220, que es indicativo de que el juez que conoce de una Litis si constata la existencia de una causal de nulidad absoluta puede, de oficio, es decir, sin pedido de parte, declarar la nulidad del acto

jurídico vinculado a la controversia, sin más requisito que la nulidad “resulte manifiesta”.

La facultad que el acotado párrafo del artículo 220 otorga a los órganos jurisdiccionales es anterior a la entrada en vigor del Código Procesal Civil y tiene una aparente contradicción con sus normal y principios informantes, fundamentalmente con la manera como el vigente ordenamiento procesal ha organizado el proceso y sus etapas preclusivas, el impulso que corresponde a las partes (artículo IV del Título Preliminar) y el impedimento del juez de ir más allá del petitorio y en fundar su decisión en hechos diversos de lo que han sido alegados por las partes (artículo VII del Título Preliminar). La facultad conferida a los jueces por el Código Civil es excepcional y les permite declarar la nulidad en la sentencia, aunque no haya sido alegada en el petitorio de la demanda, en el de la reconvención, ni en las contestaciones mediante las cuales se ejercita el derecho de contradicción.

Al respecto, es oportuno citar la opinión de Ludwig Enneccerus (1954), quien en su libro titulado: *Tratado de Derecho Civil*, señala que:

El juez debe tener en cuenta la nulidad que le sea conocida, aunque no la invoque aquel a quien favorece, ya que no es menester una acción especial encaminada a producir la nulidad, ni tampoco a constatarla, puesto que se produce sin más, en virtud de la ley (pág. 309).

Es entonces que se presenta la necesidad de precisar el pedido de lo que vendría a ser la nulidad que “resulte manifiesta”. El sentido de esta puede orientarse hacia dos significados en particular. Tratándose el primero desde el ámbito semántico,

indicando que consiste en aquella que se presenta de una forma explícita y clara, a la que cualquier órgano jurisdiccional puede percibir con facilidad. Por otra parte, el segundo puede entenderse no como la manifestación en un primer momento, sino hasta después de recurrir a un órgano jurisdiccional para corroborar si se debe llevar a cabo la nulidad o no, aun así, el tema a tratar no sea inválido.

2.2.2.4. El Acto Jurídico no puede ser Confirmado

Fernando Vidal Ramírez (1986), expresa lo siguiente en cuanto al punto mencionado: “La nulidad absoluta constituye una sanción más rigurosa al fundamentarse en consideraciones de orden público, razón por la cual no es subsanable por la confirmación” (pág. 555).

Esta característica es considerada fundamental debido a que representa un refuerzo para la investigación, debido a que no es posible que algún acto jurídico nulo pueda ser ratificado por la misma razón de que su origen ya de por sí se cataloga como inexistente jurídicamente. Si la intención implícita que se pretende ejecutar es la de asegurar la protección del interés público, no puede haber forma de revertir tal hecho sin que existan consecuencias graves.

El autor Guillermo Lohmann Luca de Tena (1994), expresa lo siguiente:

Aunque los actos nulos no pueden ser confirmados ¿hay otra manera de solucionar el vicio y permitir que el acto despliegue sus efectos y que estos tengan protección jurídica? La respuesta es negativa, salvo que se produzca su conversión en otro acto (pág. 563).

En la cita mencionada el profesor da a conocer un medio por el cual se pueda llevar a cabo la ratificación de un acto jurídico nulo, siendo esta entonces la conversión.

No es posible subsanar la nulidad absoluta, es gracias a ello por lo que inmediatamente se descarta la opción de utilizar la confirmación para convalidar, puesto que esta viene a ser todo lo contrario a la herramienta legal previamente mencionada por Lohmann.

2.2.3. Distinción con Otra Figuras: Ineficacia y Anulabilidad

2.2.3.1. Ineficacia

Un acto jurídico es identificado como ineficaz cuando no produce sus efectos jurídicos normales o las repercusiones no son perceptibles en relación con personas en específico. Por consiguiente, se deben tratar los puntos o las causales que, irremediablemente propician la ineficacia de la acción tratada.

Teniéndose entonces los siguientes puntos, es que se puede establecer un análisis descriptivo de los factores que promueven la ineficacia del acto, siendo en primera instancia el presentarse condiciones de invalidez o la falta de uno de los requisitos exigidos por cada acto jurídico. Por consiguiente, cabe mencionar que es también un constituyente de los factores que prueban la ineficacia del acto la presencia de causas extrañas en la composición de este. Con ello, se refuerza la idea de la necesidad de establecer requerimientos para la celebración de un acto jurídico a pesar de que este se encuentre invalidado, puesto que, también es una acción legal y por ende debe cumplirse con ciertos parámetros preestablecidos.

2.2.3.2. Anulabilidad

El artículo 222 del código civil dispone que el acto jurídico es anulable desde su celebración por efecto de la sentencia que lo declare.

Las diferencias que existen entre el acto jurídico nulo es que en el acto jurídico anulable la declaración de voluntad existe y, por lo tanto, el acto jurídico también existe, pero existe un vicio formativo por el que puede ser anulado. Por lo tanto, el acto posee sus diversos elementos esenciales para su existencia, pero lleva en sí, un vicio que da lugar a que las personas perjudicadas planteen la anulación para subsanar los intereses privados lesionados.

CAPITULO III

DEBIDO PROCESO

3.1. Debido Proceso Legal

3.1.1. Concepto

Se tiene a los siguientes autores para poder realizar un acercamiento detallado en la definición del debido proceso tal cual, siendo entonces para Devis Echandía, citado por Sagástegui Urteaga (2003), en el libro titulado: *Exégesis y Sistemática del Código Procesal Civil*, este concepto debe integrar las condiciones dictadas a continuación: “Dotar al juez para que procure hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, protegiendo al débil que siempre es el más pobre”. Esto con el fin de concretar la función primordial que cumple la justicia en la sociedad, procurando salvaguardar la integridad del individuo que más lo necesite, poniendo como prioridad en este caso, el estatus económico de este. Por otra parte, se tiene a la “inmediación del Juez sobre el material probatorio y sobre los sujetos del proceso”, requiriendo entonces no sólo el actuar rápido del ya mencionado, sino también de su efectividad ejerciendo su profesión. “La aceleración del proceso, en cuanto sea posible dentro del sistema parcial de la escritura”. Este punto es importante debido a múltiples acontecimientos que podrían suscitarse y que, en efecto, podrían ralentizar e incluso imposibilitar la ejecución del proceso. “El carácter dispositivo del proceso en cuanto a su iniciación y a la libertad para concluirlo por transacción o desistimiento, si las partes son incapaces mediante licencia previa”, con el fin de facilitar la ejecución de este. A partir del siguiente punto, se verá la ratificación de las pruebas y el rol que cumplen las mismas dentro de la ineficacia en el acto, poseyendo entonces “carácter inquisitivo en materia de pruebas”, además de ello, se tiene

la denominada “valoración de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y mediante una adecuada motivación” con el fin de llevar a cabo una validación adecuada de estas dentro del proceso. “Una combinación del impulso del juez de oficio y del secretario, una vez iniciado el proceso con la perención por incumplimiento de la carga de las partes de promover su trámite si aquello no cumplen oficiosamente,” añadido a ello se debe tomar en cuenta también la “responsabilidad civil de los jueces, partes y apoderados por sus acciones en el proceso”, asimismo se atribuyen las respectivas potestades a las autoridades en este proceso, tal cual indica el siguiente punto, siendo “Amplias facultades al Juez para prevenir y sancionar el fraude procesal con el proceso y en el proceso y todo acto de deslealtad o mala fe de las partes, los apoderados y los terceros”. La “Simplificación de los procesos especiales innecesarios”, con el fin de realizar todo a la brevedad posible. “El principio de las dos instancias como regla general”, y teniéndose como última instancia la “Gratuidad de la justicia civil”. (págs. 8 - 9)

Por otra parte, es entonces que se considera al “debido proceso general” como “el derecho de los justiciables a un proceso judicial sin postergaciones, retrasos, alteraciones o deformaciones, durante el camino, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo”; ello con la intención de garantizar la seguridad jurídica que se entiende debe estar incorporada como parte indispensable en todo proceso y procedimiento, así pues lo que se pretende es evitar: “que desvirtúen su finalidad que es la justicia. Consecuentemente, queda claro que, prima facie, el derecho que tienen los justiciables a un derecho justamente, debido”.

3.1.2. Formas

En cuanto a los que se refiere al “debido proceso general”, es preciso indicar que aparecen ciertas modalidades de ejecución: La denominada “adjetiva o formal”, lo cual representa aquella garantía de que se desarrolle de manera adecuada y transparente y la “sustantiva o material”, en lo que corresponde al criterio que ha de adoptar el juzgador que se entiende debe basar sus argumentos en aspectos razonables y debidamente motivados para alcanzar el carácter proporcional, con cuya característica se puede llegar a establecer de única forma la justicia de la decisión.

Artículo 4 del Código Procesal Constitucional peruano:

“... Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.

3.1.2. Pluridimensionalidad

En primer lugar, es necesario priorizar el constato que, si bien es cierto que el derecho es un sistema u ordenamiento jurídico de normas obligatorias, sistemáticamente jerarquizadas, que regulan el desenvolvimiento de la vida humana en sociedad. Es un arte, una disciplina que crea, desarrolla, interpreta, ordenamientos y principios jurídicos. No es ya un mero conjunto de normas (positivismo), tampoco fue o posee carácter de ciencia.

En segundo lugar, se tiene que el derecho, al margen que actualmente la doctrina mayoritaria no solo peruana sea conteste con su tridimensionalidad, siendo constituida por el Hecho, Valor y La norma; por lo cual la sugerencia que se desprende como modelo a seguir es que se reconozca como una fuente para que el aprendizaje de esta figura se asimile desde su “naturaleza octodimensional imprescindible”, para alcanzar objetivos más claros en su desempeño jurídico.

Las ocho dimensiones del derecho son planteadas por el profesor José Antonio Silva Vallejo (2007), en su publicación titulada: *El pensamiento Filosófico y Jurídico*, dichas dimensiones son enumeradas del siguiente modo. Empezando por las denominadas “normas”, mismas que vienen a constituir en conjunto, leyes positivas de las cuales se espera, se cumplan dentro la sociedad. Los “hechos”, son aquellos que pueden ser vistos también como realidades dentro de la doctrina jurídica; cabe destacar que esta última se constituye por “valores” siendo en específico los de equidad, autonomía, seguridad, paridad, etc. El “tiempo jurídico”, por otro lado, se constituye por plazos, tiempos, condiciones, requisitos, entre otros similares. Se tiene también al “espacio jurídico”, el cual es por definición, un lugar donde se logra concretar el derecho. La “historia tal cual está conformada por las épocas, los tiempos y períodos específicos en los cuales se desarrollaron determinados acontecimientos. Además de ello, se tiene a la ideología” que cumple la función de ser el interés implícito en el derecho y por último están las “vivencias, las cuales vienen a ser aquellas experiencias que determinan situaciones y actitudes frente al justiciable y permiten que se entienda mejor el contexto del caso durante cualquier acción legal” (pág. 7).

Conforme se ha mencionado respecto a la “visión octodimensionalista del derecho”, es prudente señalar que puede considerarse esta doctrina siendo abordada también según lo que se plasma en sus directrices de amplia aplicación en el derecho.

Ya en el sitio tercero, de conformidad con la ordenación de ideas establecido, se considera “que el debido proceso general o legal, conforme a la pluridimensionalidad del derecho, deba y tenga que sintonizar además (o intente legítimamente hacerlo) con sus correspondientes dimensiones también múltiples (y no únicamente en tres –hecho, derecho y norma-, por ejemplo), en campos de un proceso debido igualmente legal o general”.

3.2. Debido Proceso Civil

3.2.1. Generalidades

Si bien es cierto que la llegada o reconocimiento legislativo del debido proceso legal en el mundo del derecho (a nivel de casi todos los Estados) no pudo ser más acertada y aplaudida, cabe resaltar que la sola vigencia y posterior como paulatina aplicación de este, no garantiza necesariamente que su ámbito aplicativo requerido para que dicho proceso debido se efectivice en las tres modalidades.

Considerándose entonces imprescindible la plasmación o aterrizaje del debido proceso general, pero en las canteras del derecho civil, es decir, que es muy necesario precisar lo relacionado al debido proceso general, pero orientado al debido o justo proceso civil: esto es, desarrollar la temática del debido proceso civil, a efectos que hacerlo palpable, aplicable y efectivo, más allá de su mera denominación como tal.

3.2.2. Concepto

Lo que se puede entender como un correcto desarrollo del proceso en el ordenamiento o esquema civil peruano, es aquello que se refiere a que las partes intervinientes en él con el fin de ser atendidos sus intereses es que sea ejecutado “sin postergaciones, retrasos, alteraciones o deformaciones, durante el camino, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo; que desvirtúen su finalidad que es la justicia y su respectiva seguridad jurídica”.

3.2.3. Fundamento

Es en la Constitución Política del Perú donde puede encontrarse un sustento y justificación de la vigencia propia del “debido proceso civil”, específicamente respecto al numeral tercero del articulado 139, indicando lo siguiente: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.

Conforme se ha podido apreciar que el ordenamiento constitucional recoge en su estructura al debido proceso general o también considerado legal, por el cual se debe asumir que todo el ámbito jurídico debe asumir este parámetro, así como en sus ordenamientos procesales, desde luego con la correspondiente adecuación al esquema en que se ha de ejecutar.

Se considera además un aspecto importante a la acción de reconocer a esta figura dentro del ordenamiento procesal civil que incorpora en su parte preliminar, donde aparece incorporado los parámetros y directrices que corresponden. “No obstante, debido a que la ley peruana no posee un integral, desagregado, sistematizado y consolidado desarrollo (no solo en el ámbito legislativo) del debido proceso, es entonces que debe considerarse también la parte pertinente de la Ley Orgánica del Poder Judicial Peruano” (LOPJ).

3.2.4. Importancia

Se considera adecuado el hecho de mostrar como consideración del gran relevo y el trascender del principio bajo estudio, puesto que, en conclusión, el justiciable busca que se lleve a cabo una solución jurídica justa y apropiada para el conflicto tratado. Por otro lado, se tiene cuando el magistrado resuelve dentro de los términos establecidos, teniendo que hacerlo conforme al debido proceso civil; indíquese entonces la importancia de su desarrollo.

El correspondiente proceso civil, está en el deber de constatar su legítima aplicación real y total. Esto se considera factible en el derecho procesal civil peruano puesto a que corresponde con la corriente procesal decisionista inquisitiva. En el orden suscitado de ideas, se toma en cuenta pertinentemente señalar que el proceso mencionado deberá constituirse o configurarse como tal, cuando en el mencionado se logre entender, interpretar y aplicar estrictamente los principios y lineamientos del proceso civil a todos los justiciables.

3.2.5. Principios del Debido Proceso Civil

De acuerdo con el punto tratado, deben considerarse principios los siguientes:

i. De Socialización - Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

La autoridad jurídica, siendo por lo general un juez, está en la obligación de tratar de manera equitativa y sin distinción alguna a los justiciables; obviando aspectos tales como posición económica, social, condiciones naturales, entre otros.

ii. De Preclusión.

Cuando se cumplen los plazos procesales señalados, puede considerarse una etapa concluyente la cual impide el retorno a la misma. En cuanto a ello, se pronunció Luis Ribó Durand (1987) en su obra: *Diccionario de Derecho*, donde formula lo siguiente: “(...) los derechos y deberes que hubieran podido ejercitarse y no lo fueron, se consideran abandonados (...)” (pág. 327).

iii. De Adquisición Procesal.

Consiste en la pérdida de posesión de instrumentos que se presentaron junto a la demanda por parte de los agentes implicados dentro del proceso, pasando a ser pertenecientes de este.

iv. De Publicidad.

Se debe tener en cuenta la demostración de la garantía por parte del magistrado, de que el proceso se lleve con fácil accesibilidad y también al expediente, por parte de los justiciables.

v. De Dirección e Impulso del Proceso – Artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

El juez es quien lleva a cabo el manejo y mando del proceso. En cuanto al impulso procesal, se tiene el aporte de Eduardo Couture (2002), quien manifiesta en su libro: *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, lo siguiente: “Se denomina impulso procesal al fenómeno por virtud del cual se asegura la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo” (pág. 142).

Más se establece la necesidad de constatar que este deber de evitar que el proceso se estanque en el desarrollo no es solo atribuible al Juez, sino además a las partes implicadas siempre y cuando el ya mencionado no ejecute sus funciones como tal.

vi. El denominado Iura Novit Curia – Artículo VII del Título Preliminar del Código Civil.

El significado en castellano del aforismo en latín es: “el juez conoce o sabe de derecho”. Al respecto, Juan Morales Godo (2005), en su publicación titulada: *Instituciones de Derecho Procesal*, acotando: “El origen de la misma data en la edad media, cuando un Juez le decía a uno de los abogados defensores que hacía uso de la palabra: venite ad factum, curia iura novit – dadme los hechos, que yo conozco el derecho” (pág. 127).

El principio señalado puede reconocerse del numeral “VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil Peruano” vigente, en el cual se aprecia que debajo del título de Juez y derecho, indica: “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido

invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”.

vii. De Tutela Jurisdiccional Efectiva – Artículo I del Título Preliminar del Código Civil.

Considérese esta la garantía del justiciable a que cualquier acción o petición judicial que manifieste será aceptado bajo tutela judicial, posterior a ello podrá ser materializado o resuelto en la sentencia correspondiente, por último, que sea debidamente ejecutada bajo la tutela efectiva

viii. De Congruencia.

Restringe la capacidad de acción por parte del juez, puesto que solo podrá pronunciarse referido a lo solicitado por las partes. De este modo, los otros principios planteados no poseían motivo alguno por el cual ser en el supuesto que el juez no dicte su veredicto en abierta violación del principio tratado en este punto de la investigación. En consecuencia, el compromiso mantenido por quien juzga a través del principio mencionado logra abarcar una esfera saludablemente mayormente compleja.

ix. De Economía y Celeridad Procesales – Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

Aquellos actos pertenecientes al proceso están en el deber de asegurar que se ocupe el menor tiempo posible para resolver el problema, así como lo

que se entiende por la inversión que se genera y la fuerza que se emplea para cumplir la meta del proceso; además de poder concretarse en el menor período posible, guardando respeto por los plazos establecidos por la ley.

x. De Orientación hacia la Resolución de Conflictos de Intereses e Incertidumbre Jurídicos – Artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

El proceso debe estar únicamente orientado a dilucidar o solucionar conflictos de intereses e incertidumbres jurídicos, de relevancia precisamente de naturaleza jurídica.

xi. De Contradicción.

Ante la interposición de una acción o demanda, la parte demandada tiene garantizado su derecho a la contestación, esto es, a la defensa.

xii. De Inmediación – Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

El juez del proceso tiene que garantizar el fluido acceso a su persona, por parte de las partes intervinientes en el mismo.

xiii. De la Correcta Conducta de los Actores en el Proceso – Artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

Los cuales están en la obligación de darse de forma óptima, guardando el respeto debido hacia los principios inspiradores del debido proceso civil.

Por ende, no están en la capacidad de incidir en precipitación y mala fe procesales.

xiv. De la Iniciativa de Parte – Artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

Por el que solo aquellas partes partícipes del proceso poseen la facultad de promover el comienzo de su ejecución.

xv. De Concentración – Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

El acto procesal está en el deber de ejecutarse lo antes posible.

xvi. De Imperatividad de las Normas Adjetivas – Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

Durante el proceso debe cumplirse estrictamente lo prescrito en la normativa.

xvii. De Pluralidad de Instancias.

Lo resuelto por el juez inferior puede ser revisado por el de superior jerarquía, garantizando la revisión de lo resuelto.

xviii. De Motivación de las Resoluciones Judiciales – “Artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Los documentos resolutorios requieren de un fundamento jurídico respectivo que permite la sustentación o validación de estas, exceptuando las destinadas a tramitar.

xix. De Imparcialidad e Independencia del Magistrado.

El juez tiene la obligación de solucionar el conflicto en afán de no damnificar ni beneficiar a cualquiera de las partes implicadas. La imparcialidad es característica inherente de la justicia, por lo cual debe cumplirse en cualesquiera los procesos se lleven a cabo por causa de alguna demanda. Además de ello, es prudente señalar que debe actuarse con libertad sin ceder a presiones que conduzcan a la alteración de las decisiones tomadas.

3.3. Diferencias entre el Debido Procesal Legal y el Debido Proceso Civil

Tratándose del debido procesal legal, es característico de éste el desenvolvimiento con justeza durante la trayectoria que implique el proceso (iter procesal). Es comprendido del mismo modo por parte del autor Víctor Ticona Postigo (2009) en su obra titulada: *El Derecho Proceso Civil*, indicando: “Es un derecho humano o fundamental que tiene toda persona y que le faculta exigir al estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente” (pág. 64).

Por otro lado, el debido proceso civil puede denotarse como un término diferenciado al proceso civil, en última instancia se considera una suerte de proceso civil recargado, puesto que enfatiza una marca de correspondencia con lo justo, oportuno y eficaz que en el ámbito civil debe ser considerado como importante para alcanzar la correcta defensa de los intereses que corresponden a las partes del proceso.

En otras palabras, la diferencia existente entre ambos términos consiste en que el debido proceso legal concede al justiciable el derecho de tener un proceso adecuado y equitativo en las tres modalidades presentadas por el mismo, quien solamente asegura y entrega lo

que le corresponde a la parte procesal, considerando aquellas directrices que dan pie a la inspiración de llevar a cabo un debido proceso.

CAPITULO IV

ANÁLISIS Y RESULTADOS

4.1. Tipo de Investigación

4.1.1. De acuerdo con el Fin que se Persigue

El nivel de profundidad, con el que se pretende abordar el problema de investigación, ha conllevado a determinar que el estudio es de acuerdo con el fin de que se persigue es de tipo:

Tipo Jurídico – Propositivo: “... Se analiza la ausencia de una norma o se cuestiona una existente, determinando sus límites y deficiencias para proponer una nueva, la derogación o reforma” (Aranzamendi Ninacondor, 2009, pág. 163)

Por lo que, en la presente investigación, se advertirán las deficiencias de actual regulación a las garantías del debido proceso en la prescripción extintiva de la nulidad del acto jurídico.

Tipo Jurídico – Proyectivo: “una característica de la ciencia es predecir acontecimientos y proyectar a resolver problemas del futuro. La verdad jurídica es creada e innovada y creada en consideración a las nuevas realidades y circunstancias y se desarrolla con proyección al futuro respetando las tendencias predominantes en el presente” (Aranzamendi Ninacondor, 2009, pág. 163).

Con la presente investigación, se pretende resolver el problema normativo de la afectación del derecho al debido proceso en casos de prescripción extintiva de nulidad del acto jurídico mediante una modificación legislativa, debiéndose añadir el art. 220-A además de ejecutar la modificación del inciso primero perteneciente al artículo 2001 del Código Civil.

4.1.2. En concordancia con el Diseño de Investigación

El diseño es catalogado de tipo **cualitativo** para la investigación, por la razón de que es esencialmente argumentativa, “lo más que hacemos, es observar los hechos o fenómenos tal como se expresan en su contexto natural y mediante un proceso cognitivo la interpretación jurídica, social, axiológica o políticamente, proponiendo posibles soluciones a base de argumentos [razonables]” (Aranzamendi Ninacondor, 2009, pág. 163).

4.2. Población y Muestra

4.2.1. Población

Para el trabajo desarrollado se consideró tomar en cuenta el criterio de definir a la población, en especial a Jueces Civiles pertenecientes a Chiclayo y Abogados habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Chiclayo.

4.2.2. Muestra

La intención de señalar una muestra es conseguir que la orientación del análisis que se basa en la población elegida como tal, deba estar definida con claridad, así los resultados podrán ser utilizados para sentar el argumento válido para la propuesta que se pretende

conseguir como aporte de esta investigación, por lo que se constituye como una porción mínima y representativa de lo que sería la población elegida.

Para esta investigación se tomó como muestra a 10 Jueces Civiles de Chiclayo y 90 Abogados habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Chiclayo.

4.3. Procesamiento de Datos

4.3.1. Análisis de Encuestas

La presente encuesta fue realizada a los abogados y jueces, teniendo como población la cantidad de 100 de encuestados.

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

PREGUNTA N° 01

¿Conoce usted respecto del plazo prescriptorio de diez años para solicitar la nulidad del acto jurídico, establecido en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil?

PREGUNTA N° 01	N° DE RESPUESTAS		PORCENTAJE	
	JUECES	ABOGADOS	JUECES	ABOGADOS
SI	10	100	100%	100%
NO	0	0	0%	0%

TOTAL	10	90	100%	100%
--------------	----	----	------	------

Realizado el análisis, se observó que de los 100 encuestados entre Abogados y Jueces, se determina que el 100% conocen del plazo prescriptorio de diez años para solicitar la nulidad del acto jurídico, establecido en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil.

Los especialistas en la materia opinan que, sabiendo mejor los plazos de la prescripción darían una solución más rápida y eficaz, ya que se refiere a la acción que persigue la responsabilidad contravencional y a la caducidad de las sanciones impuestas por la contravención.

PREGUNTA N° 02

¿Considera usted que el inciso primero del artículo 2001 del Código Civil, que regula la prescripción extintiva del acto jurídico nulo en diez años, vulnera las garantías del debido proceso?

PREGUNTA N° 02	N° DE RESPUESTAS		PORCENTAJE	
PROFESIONAL	JUECES	ABOGADOS	JUECES	ABOGADOS
SI	8	82	80%	91%
NO	2	8	20%	9%
TOTAL	10	90	100%	100%

Concretado el análisis, como resultados se tiene que de un total de 100 encuestados (siendo estos abogados y jueces), se observa que existe cierta discrepancia en los resultados. Entre los jueces 8 de los 10 encuestados manifestaron una posición afirmativa en cuanto a esta consulta, ellos representan un 80% del total. En cuanto a los abogados, 82 de los 90 encuestados manifestaron tener una posición afirmativa en cuanto a la premisa propuesta, siendo esto un total del 91%. En su conjunto la mayoría considera que el inciso primero del artículo 2001 del Código Civil, que regula la prescripción extintiva del acto jurídico nulo en diez años, vulnera las garantías del debido proceso, debido a que se limita el derecho constitucional de acción del afectado con un acto que en la realidad no existe, y que tampoco podría ser convalidado, por tanto debería pues estar expedito el derecho para acudir a la vía jurisdiccional con el fin de que el juez emita una sentencia declarativa, en la que se conoce, no se modifica el statu quo sino el juez solo se limita a declarar una situación de hecho ya establecida.

PREGUNTA N° 03

¿Considera usted que el plazo de 10 años que opera como plazo prescriptorio para solicitar la nulidad del acto jurídico, afecta el derecho fundamental de propiedad?

PREGUNTA N° 03	N° DE RESPUESTAS		PORCENTAJE	
	JUECES	ABOGADOS	JUECES	ABOGADOS
SI	7	66	73%	70%
NO	3	28	27%	30%
TOTAL	10	90	100%	100%

Realizado el análisis, se observó que el porcentaje de abogados y jueces que opinan a favor es parecido (73 y 70% respectivamente), esto se debería a que en estos casos se maneja una posición semejante en razón que se conoce que se está violentando flagrantemente el derecho de propiedad con un acto nulo.

Los que opinan de manera negativa a la consulta realizada señalan que tampoco se puede eternizar la propiedad del demandante cuando esta es descuidada o cuando existen terceros que podrían verse afectados con futuras transferencias. Sin embargo, ante estas posiciones se debe recordar que existe la prescripción adquisitiva de dominio que es una figura jurídica con la que de alguna manera se “castiga” al propietario descuidado; asimismo, el art. 2014 de nuestro Código Civil protege al tercero que adquiere con buena fe.

PREGUNTA N° 04

¿Estaría usted conforme con que la declaración de mejor derecho de propiedad (en el que se tendría que discutir la nulidad de un acto jurídico que transferencia de un bien), importaría en sí el ejercicio de un derecho de reivindicación que ejerce el propietario contra un tercero que se arroga igual derecho de propiedad?

PREGUNTA N° 04	N° DE RESPUESTAS		PORCENTAJE	
	JUECES	ABOGADOS	JUECES	ABOGADOS
SI	7	73	70%	81%
NO	3	17	30%	19%
TOTAL	10	90	100%	100%

Teniéndose entonces los resultados del análisis, se tiene que, de los 10 magistrados encuestados, 7 de ellos estarían conforme con que la declaración de mejor derecho de propiedad importaría en sí el ejercicio de un derecho de reivindicación que ejerce el propietario contra un tercero que se arroga igual derecho de propiedad, lo que representa un total del 70% de jueces; mientras que 3 encuestados, no están conformes, lo que representan el 30%.

Un caso parecido sucede entre los abogados, para los que 73 de ellos estarían conforme con la premisa propuesta, lo que representa un 81% de los abogados, mientras que 17 de ellos, no están conformes, lo que representan el 19%.

En ambos casos esto se debe a una discrepancia doctrinaria existente tanto en la magistratura como en los abogados en ejercicio, ya que no todos consideran válida esta premisa.

Además, este contraste es comprobable en el análisis de las documentales que se encuentran en las siguientes de la presente investigación.

PREGUNTA Nº 05

¿Considera usted que en algunos casos se daría una contradicción entre el plazo prescriptorio de la reivindicación, que es imprescriptible y la nulidad del acto jurídico, que prescribe a los 10 años?

PREGUNTA Nº 05	Nº DE RESPUESTAS		PORCENTAJE	
	JUECES	ABOGADOS	JUECES	ABOGADOS

SI	8	59	80%	66%
NO	2	31	20%	34%
TOTAL	10	90	100%	100%

Realizado el análisis, se observa una postura más favorable a la consunta entre los magistrados (80%) en relación a los abogados participantes (66%).

Para entender en total magnitud esta consulta se debe entender lo establecido en la CAS. N° 1458-2007, en el sentido que se establece que la declaración del mejor derecho de propiedad puede ser discutida inclusive dentro de un proceso de reivindicación, en vista de la necesidad de establecer la prioridad y preferencia de los derechos reales en contienda, pues cuando un propietario señala tener preferencia sobre idéntico derecho alegado por un tercero, ejerce en el fondo su derecho reivindicatorio frente éste.

Básicamente, por argumentos parecidos es que los profesionales del derecho están conformes con esta postura. En contraparte lo que no la están, señalan que esto se debería que no en todos los casos podría analizarse como reivindicación en casos de prescripción de la nulidad del acto jurídico, pero no mencionaron algún caso no aplicable.

PREGUNTA N° 06

¿Considera usted que el plazo de prescripción para accionar la nulidad de un acto jurídico nulo perjudica a otras acciones consideradas como imprescriptibles, como la petición de herencia?

PREGUNTA N° 06		N° DE RESPUESTAS		PORCENTAJE
PROFESIONAL	JUECES	ABOGADOS	JUECES	ABOGADOS
SI	6	73	60%	81%
NO	4	17	40%	19%
TOTAL	10	90	100%	100%

Realizado el análisis, se observa una posición casi dividida entre los magistrados, ya que 6 de ellos, que representa un total de 60%, tienen una postura favorable ante esta consulta, mientras que entre los abogados 73 de ellos opinan a favor, lo que representa el 81% de ellos.

Esta posición es compartida debido a que la normativa debe ser clara y no generar confusiones innecesarias a la generalidad de las personas y no solo a los operadores jurídicos de entre los cuales no debería haber mayores inconvenientes.

Entre las posiciones negativas de jueces y abogados que representan un total 40% y 19% respectivamente manifiestan que no necesariamente afectan porque en esos casos “el juez conoce el derecho” y por tanto debería aplicarse la norma que corresponda.

PREGUNTA N° 07

¿Considera usted que sería más adecuado que la nulidad del acto jurídico sea imprescriptible?

PREGUNTA N° 06		N° DE RESPUESTAS		PORCENTAJE
PROFESIONAL	JUECES	ABOGADOS	JUECES	ABOGADOS

SI	9	82	90%	91%
NO	1	9	10%	9%
TOTAL	10	90	100%	100%

Conforme se puede apreciar de los resultados se observa que habiendo encuestado a 10 magistrados, se observa que 7 de ellos, que vienen a representar el 70%, consideran que sería más adecuado que este plazo también sea imprescriptible; mientras que en los abogados 62 de los encuestados, que vienen a representar el 69%, consideran que no sería adecuado que el plazo sea imprescriptible.

Esta posición es compartida por el autor en razón de que mantener un acto nulo en un sistema jurídico en el que no es posible convalidarlo, así como tampoco lo hace el transcurso del tiempo. Tal es así que la Corte Suprema está emitiendo fallos en este sentido (Véase CAS. N° 1519-2008 ICA y CAS. N° 1519-2008 ICA), interpretando de la manera más restrictiva posible los alcances de esta norma.

En ese contexto, conviene que no exista un plazo prescriptorio para solicitar la nulidad de actos jurídicos nulo.

4.3.2. Análisis De Documentales

“SALA CIVIL TRANSITORIA CAS. N° 1458-2007 LIMA”

SUMILLA

“IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN REINVINDICATORIA: MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD”

“Atendiendo a que la excepción de prescripción planteada tanto por los demandados como por la litisconsorte necesaria se fundamenta en la aplicación del plazo prescriptorio previsto en el inciso 1° del artículo 2001 del Código Civil, y habiendo determinado esta sede casatoria que la declaración del mejor derecho de propiedad importa el ejercicio de la atribución reivindicativa que consagra el artículo 923 del Código antes mencionado, la pretensión planteada por la Fundación Ignacia Rodulfo Viuda

Lima, doce de agosto del año dos mil ocho. -

“LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número mil cuatrocientos cincuenta y ocho – dos mil siete, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, de conformidad con lo opinado en el dictamen de la señora Fiscal Suprema en lo Civil, emite la siguiente sentencia; de la acción formulada por los demandados Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Cooperativa de Vivienda San Juanito Limitada, así como por la litisconsorte pasiva Superintendencia de Bienes Nacionales, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, careciendo de objeto el pronunciamiento respecto de las demás excepciones deducidas”.

Quinto.- Que, la causal de inaplicación de una norma de derecho material se configura cuando concurren los siguientes supuestos: i.- el Juez, por medio de una valoración conjunta y razonada de las pruebas, establece como probados ciertos hechos alegados por las partes y relevantes del litigio; ii.- que estos hechos guardan relación de identidad con determinados supuestos fácticos de una norma jurídica material; iii.- que no obstante esta relación de identidad (pertinencia de la norma) el Juez no aplica esta norma

(específicamente, la consecuencia jurídica) sino otra distinta, resolviendo el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, particularmente, lesionando el valor de justicia. **Sexto.-** Que, respecto de la imprescriptibilidad de las acciones procesales (dicho en strictu sensu, de las pretensiones procesales), como excepción a la regla general que permite la prescripción de las mismas, en tanto la sanción normada por la inactividad del titular del derecho sin que ejercite las facultades que la ley le otorga durante un determinado periodo de tiempo, este Supremo Tribunal en la Casación dos mil setecientos noventa y dos –dos mil dos– Lima, publicada el dos de agosto del año dos mil cuatro (así como también lo ha hecho la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente en la Casación número mil trescientos noventa y nueve – dos mil siete - Moquegua, publicada el veintinueve de febrero del año en curso), ya se ha pronunciado en el sentido de que, no obstante que el Código Civil señala expresamente como pretensiones imprescriptibles las reguladas en los artículos seiscientos sesenta y cuatro, novecientos veintisiete y novecientos ochenta y ocho, esto es, la acción petitoria de herencia, la acción reivindicatoria y la acción de partición, sin embargo dicha enumeración no es cerrada ni absoluta, en la medida que no impide que se puedan considerar que existan otras pretensiones que detentan el mismo carácter. **Sétimo.-** Que, en reiteradas ejecutorias supremas, esta Sala Civil Transitoria ha establecido que la declaración del mejor derecho de propiedad puede ser discutida inclusive dentro de un proceso de reivindicación, en vista de la necesidad de establecer la prioridad y preferencia de los derechos reales en contienda, pues cuando un propietario señala tener preferencia sobre idéntico derecho alegado por un tercero, ejerce en el fondo su derecho reivindicatorio frente éste. **Octavo.-** Que, en efecto, debe precisarse que el artículo novecientos veintitrés del Código Civil regula como atributo especial del derecho

de propiedad el otorgar a su titular la facultad de reivindicar un bien. Si el derecho a reivindicar se ejerce sólo contra el poseedor, podríamos concluir que nos encontramos ante una reivindicación propiamente dicha, pero si el derecho a reivindicar se ejerce contra quien alega un igual derecho de propiedad, aquello no impide ni constituye obstáculo para que el Juez se pronuncie sobre la prioridad o preferencia de los derechos de propiedad contrapuestos y, en consecuencia, dilucidando el conflicto de intereses, reivindique el derecho al propietario que estime que detenta el mejor derecho de propiedad, sin que ello impida que esta pretensión reivindicatoria pueda plantearse, precisamente, como una de mejor derecho de propiedad, pues el fin que se persigue es el mismo. **Noveno.-** Que, en tal sentido, desde que la “declaración de mejor derecho de propiedad importa en sí el ejercicio de un derecho de reivindicación que ejerce el propietario contra un tercero que se arroga igual derecho de propiedad”, los efectos del artículo novecientos veintisiete del Código Civil se extienden a la imprescriptibilidad de tal declaración. **Décimo.-** Que, en autos la Fundación Ignacia Rodolfo Viuda de Canevaro demanda la “declaración de mejor derecho de propiedad” sobre un terreno a forma alternativa, el pago del valor de dicha propiedad, entre otras pretensiones accesorias, lo que importa el ejercicio de la potestad reivindicatoria que asiste a todo propietario, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos novecientos veintitrés y novecientos veintisiete del Código Civil, razón por la cual las precitadas normas resultan pertinentes y aplicables al caso de autos y, en consecuencia, amparables los fundamentos que sustentan la causal material descrita en el acápite b.- del recurso de casación. **Décimo Primero.-** Que, de otro lado, la causal de aplicación indebida de una norma de derecho material se configura cuando concurren los siguientes supuestos: i.- el Juez, a través de una valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso, llega a establecer

determinados hechos relevantes del conflicto de intereses; ii.- que tales hechos establecidos, guardan relación de identidad con los supuestos fácticos de una norma jurídica determinada; iii.- que sin embargo, el Juez, en lugar de aplicar esta última norma, aplica una distinta para resolver el caso concreto, vulnerando los valores y principios del ordenamiento jurídico, particularmente el valor superior de la justicia. **Décimo Segundo.-** Que, el inciso primero del artículo dos mil uno del Código Civil establece que prescriben, salvo disposición diversa de la ley, entre otras, la acción real; ergo, si la ley establece lo contrario, no será aplicable el plazo de prescripción establecida en dicha normatividad. Como se ha concluido al absolver la causal de inaplicación de normas materiales, siendo facultad del propietario de un bien el ejercer la potestad reivindicatoria de la misma, sea contra el poseedor sin título de propiedad o contra un tercero que contradice la demanda alegando ser igualmente propietario “en cuyo caso corresponde la declaración de mejor derecho de propiedad sea vía pretensión de reivindicación o de declaración de tal derecho”, y estando a que el artículo novecientos veintisiete del Código Civil establece que la acción reivindicatoria (entendida como el derecho a reivindicar) no prescribe, debe entenderse que la presente demanda sobre declaración de mejor derecho de propiedad o pago alternativo del valor del inmueble se encuentra precisamente dentro de las excepciones al cómputo del plazo prescriptorio que establece el mencionado artículo dos mil uno del Código Civil; razón por la cual, para el caso concreto, resulta inaplicable lo dispuesto en el inciso primero de dicho artículo, debiendo ampararse el recurso de casación también en este extremo. **Décimo Cuarto.-** Que, este Supremo Tribunal estima necesario hacer una acotación. En autos las partes emplazadas han deducido, además de la excepción de prescripción extintiva de la acción, la excepción de incompetencia, entre otras detalladas en el segundo considerando de la presente resolución; si esto es así,

resultaba como lógica consecuencia de su formulación que, antes de analizar si el derecho de la demandante prescribió o no, se determinara si el magistrado a cargo del proceso tuviera siquiera la potestad para conocer del mismo. El artículo cuatrocientos cincuenta del Código Procesal Civil implícitamente determina el orden prioritario en que deben resolverse las excepciones formuladas en el proceso y, en tal sentido, dispone que si entre ellas figuran las excepciones de incompetencia, litispendencia y/o convenio arbitral, y el Juez declara fundada una de ellas, se abstendrá de resolver las demás. Resulta obvio que en este caso, las instancias de mérito han hecho caso omiso a tal disposición, generando una incertidumbre latente sobre la competencia que les asiste para dilucidar este proceso; esto sin embargo no constituye obstáculo para que esta sede casatoria se pronuncie sobre la correcta aplicación de las normas materiales, cumpliendo el fin que establece el artículo trescientos ochenta y cuatro del Código Procesal Civil, no obstante lo cual debe llamarse severamente la atención a los magistrados inferiores, para que en lo sucesivo pongan mayor celo en el cumplimiento de sus funciones;

RESOLUCIÓN: CASARON la resolución impugnada, en consecuencia, **NULO** el auto de vista de fojas cuatrocientos ochenta y uno del mismo cuaderno, su fecha dieciocho de octubre del año dos mil seis; **y actuando en sede de instancia, REVOCARON** la resolución apelada que declara fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, con lo demás que contiene, y reformándola declararon **INFUNDADA** la citada excepción, debiendo el Juez de la causa pronunciarse sobre las demás excepciones propuestas.

S.S.

TICONA POSTIGO

SOLÍS ESPINOZA

PALOMINO GARCÍA

CASTAÑEDA SERRANO

MIRANDA MOLINA

ANALISIS

En esta sentencia de Casación la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de La República, se declaró fundado el recurso de casación e inmediatamente se optó por revocar el veredicto, reformándolo, declarando infundada la excepción de prescripción extintiva de la acción.

Como antecedente se tiene la demanda que interpuso la Fundación Ignacia Rodulfo Viuda de Canevaro con el propósito de que se haga la declaración del mejor derecho de propiedad en oposición al Ministerio de Viviendo San Juanito Limitada, del mismo modo para la litisconsorte pasiva Superintendencia de Bienes Nacionales.

Fundamento principal (según argumentación de la sentencia de casación) que: *“que la pretensión principal de mejor derecho de propiedad no puede subsumirse a una de reivindicación, a pesar de tratarse ambos de derechos reales, y que por lo tanto pueda considerarse imprescriptible a tenor de lo normado en el artículo novecientos veintisiete del Código Civil”*.

La Sala Suprema refiere que *“en reiteradas ejecutorias supremas, esta Sala Civil Transitoria ha establecido que la declaración del mejor derecho de propiedad puede ser discutida inclusive dentro de un proceso de reivindicación”*; debido a que, cuando *“un*

propietario señala tener preferencia sobre idéntico derecho alegado por un tercero, ejerce en el fondo su derecho reivindicatorio frente éste”.

En tal sentido, la Sala entiende que los efectos del artículo 967 del Código Civil, que declara la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria, debe aplicarse también a quién solicita la declaración de mejor derecho de propiedad al importar en sí el ejercicio de un derecho de reivindicación.

Asimismo, la Sala considera que en estos casos no se debe aplicar el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, debido a que en su texto expreso se advierte el enunciado “*salvo disposición diversa de la ley*”, y consideran que en estos casos la ley sí establece lo contrario.

Debe analizarse entonces que para este caso se encuentran conjugados como parte de la sentencia la compraventa y el derecho de acción; inmersos dentro de los indicadores de la prescripción extintiva y el debido proceso respectivamente. Ello debido a que tanto en la primera como en la segunda instancia se vulneración el debido proceso dentro de su faz del derecho a accionar debido a que existe en la contradicción se presenta una excepción que pudo poner fin al proceso, no realizando así, además una adecuada tutela jurisdiccional efectiva.

CAS. N° 1519-2008 ICA.

Lima, nueve de septiembre del dos mil ocho. -

“LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: VISTOS; con los

acompañados; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los señores Vocales Rodríguez Mendoza, Gazzolo Villata, Pachas Avalos, Ferreira Vildózola y Salas Medina, luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia”:

RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas setecientos cincuenta y siete por don Juan Alfredo La Cruz Mendoza contra la sentencia de vista de fojas setecientos trece, su fecha treinta de abril del dos mil ocho, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Nazca de la Corte Superior de Justicia de Ica, que confirmando la sentencia apelada de fojas seiscientos cincuenta y nueve, de fecha veintidós de octubre del dos mil siete, declara Infundada la demanda de Nulidad del Acto Jurídico y otros.

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL

RECURSO: La Suprema Sala a través de la resolución cuya fecha data del treinta de junio del dos mil ocho, optó por declarar procedente el recurso de casación por la causal contenida en el inciso 2° del artículo 386 del Código Procesal Civil, esto es por inaplicación de los artículos 219 inciso 6°, 220 y 1625 del Código Civil, pues la resolución recurrida señala la resolución que declara fundada la excepción de prescripción respecto de la pretensión de Nulidad del Acto Jurídico de la Donación de fecha quince de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, el recurrente no puede accionar, sin embargo, ello es independiente del hecho de que el documento de donación sea válido o ineficaz, siendo dicho acto nulo ya que el artículo 219 inciso 6° del Código Civil señala que el Acto Jurídico es nulo cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad y el artículo 1625 del Código Civil señala que la donación de bien inmueble debe hacerse por Escritura

Pública; por cuya razón, el “contrato privado de Compra-Venta de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa” y todos los Actos Jurídicos que nazcan de la donación mencionada, siguen la suerte de éste, resultando por tanto nulos de pleno derecho, como la Escritura Pública de confirmación de compra venta de fecha doce de julio de mil novecientos noventa y uno, no habiéndose aplicado el artículo 220 del Código Civil que dispone que no puede subsanarse por la confirmación los actos jurídicos afectados con nulidad absoluta, desconociendo la recurrida que los demandantes son propietarios del predio sub litis.

CONSIDERANDO:

“Primero.- Que, del escrito de fojas treintitrés se advierte que don Juan Alfredo La Cruz Mendoza pretende: a) se declare la nulidad del documento privado de donación de fecha quince de agosto de mil novecientos ochenticuatro, así como el contrato privado de compra venta de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa, otorgado por don Oscar Leopoldo la Cruz Villacorta a favor de don Martín Leonidas Arcos López y de la confirmación de la venta realizada mediante Escritura Pública de fecha doce de julio de mil novecientos noventiuno; b) la reivindicación, c) El pago de frutos; y d) la indemnización por daños y perjuicios”.

“Segundo.- Que, de autos se aprecia que mediante resolución de fojas doscientos treintinueve, su fecha tres de enero del dos mil uno (cuaderno de excepciones), la Sala Civil revocó la resolución de primera instancia de fecha once de setiembre del dos mil y

reformándola declaró Fundada la Excepción de Prescripción respecto a la acción de nulidad del documento de donación de fecha quince de agosto de mil novecientos ochenticuatro, por lo que concluyó el proceso respecto de dicha pretensión”.

Tercero.- Que, sin embargo, el proceso ha continuado respecto de las pretensiones de Nulidad de los Actos Jurídicos de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y doce de julio de mil novecientos noventiuno, así como la Reivindicación, Pago de Frutos e Indemnización por Daños y Perjuicios, habiendo las instancias de mérito declarado “infundada la demanda de nulidad de Acto Jurídico, señalando que los contratos antes mencionados cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 140 del Código Civil”, para la validez del acto jurídico; empero de los mismos se advierte que el contrato privado de fojas veintitrés fue otorgado en mérito a un supuesto poder notarial, otorgado al vendedor por su madre y hermanos, documento que no aparece de autos; así mismo el contrato de fojas veinticuatro, denominado confirmación de venta señala que se otorgó la venta en base al aludido poder notarial y que dicho inmueble fue transferido por donación a favor de su padre don Oscar Efraín La Cruz Mendoza, de fecha quince de agosto de mil novecientos ochenticuatro, obrante a fojas veintitrés vuelta, advirtiéndose que dicho documento de donación no resulta válido, pues si bien es cierto que el referido documento ha sido otorgado bajo la vigencia del Código Civil derogado de mil novecientos treintiséis que en su artículo 1474 establecía que la donación de inmuebles debía hacerse por escritura pública, pero sin sancionarla con nulidad, sin embargo tanto el artículo 140 inciso 4° del Código Civil vigente como el artículo 1123 inciso 3° del derogado Código Civil, determinan que para la validez del Acto Jurídico se requiere entre otros la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, siendo

así, es de concluirse que la referida donación otorgada por documento privado, sin consignar su valor real, ni las cargas que ha de satisfacer el donatario, adolece de nulidad y el hecho de que se haya declarado prescrita la acción de nulidad no le otorga validez al acto jurídico, tanto mas que es un hecho establecido en la instancia que la legalización del documento de donación no es autentica tal cual se verifica en carta a hojas veintisiete suscrita del Notario Percy González Vigil se evidencia que la legalización de las firmas es falsa lo que ha sido corroborado con la declaración testimonial del referido Notario de fojas cincuentitrés del expediente penal acompañado.

Cuarto.- Que, si bien es cierto que el contrato privado de donación ha sido otorgado durante la vigencia del Código Civil de mil novecientos treintiséis, sin embargo por tratarse de una materia que también se encuentra regulada en el Código vigente, éste resulta de aplicación al caso de autos, en virtud de la teoría de los hechos cumplidos contenida en los artículos “III del Título Preliminar y 2121 del acotado código, que establece que las disposiciones de dicho código se aplicarán inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.

Quinto.- Que, en dicho contexto la presente demanda de nulidad de Acto Jurídico debe ser amparada, pues el codemandado don Oscar Leopoldo La Cruz Villacorta transfirió el inmueble sub litis, sin que le asista derecho alguno y con un título totalmente inválido, siendo así se tiene que “los contratos de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y el de fecha doce de julio de mil novecientos noventiuno” resultan nulos y sin efecto legal alguno, resultando fundada por tanto la acción reivindicatoria solicitada por el actor, pues el predio pertenece a la masa hereditaria de Herminia Mendoza Viuda de la

Cruz, asimismo el pago de frutos también debe ser amparado, pues el entonces comprador y hoy codemandado don Martín Leónidas Arcos López al haber sostenido varios litigios posesorios sobre el mismo predio con la familia La Cruz Mendoza como consta de autos, tenía pleno conocimiento del derecho de propiedad de su contraparte, por lo que ha actuado de mala fe, resultando amparable dicha pretensión, la cual ha de determinarse cuando se ejecute la sentencia mediante pericia.

Que en lo referente a la pretensión de indemnización por daños y perjuicios, ésta debe desestimarse por improbada, pues el actor no ha acreditado en autos los daños ni los perjuicios que alega se le habría ocasionado. Siendo así se tiene que el recurso propuesto debe ampararse. **DECISIÓN:** Declararon “**FUNDADO** el recurso de casación interpuesto a fojas setecientos cincuentisiete por don Juan Alfredo La Cruz Mendoza; en consecuencia **CASARON** la sentencia de vista de fojas setecientos trece, su fecha treinta de abril del dos mil ocho; y actuando en sede de instancia: **REVOCARON** la sentencia apelada de fojas seiscientos cincuentinueve, su fecha veintidós de octubre del dos mil siete, que declaró Infundada la demanda interpuesta por don Juan Alfredo La Cruz Mendoza; y **REFORMANDOLA**, declararon **FUNDADA** en parte la demanda de fojas treintitrés, sobre Nulidad de Acto Jurídico, y en consecuencia Nulos el contrato privado de compra venta de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y la confirmación de venta de fecha doce de julio de mil novecientos noventiuno, y **FUNDADA** la demanda de Reivindicación, y Pago de Frutos; e **INFUNDADA** en cuanto a la pretensión de Indemnización por daños y perjuicios; **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por

don Juan Alfredo La Cruz Mendoza contra don Martín Leonidas Arcos López y otros sobre nulidad de Acto Jurídico y otros Ponente Gazzolo Villata; y los devolvieron”.-

SS.

RODRIGUEZ MENDOZA,

GAZZOLO VILLATA,

PACHAS AVALOS,

SALAS MEDINA

**EL VOTO DEL SEÑOR VOCAL SUPREMO FERREIRA VILDÓZOLA, ES
COMO SIGUE:**

Segundo: Que, del Cuaderno de Excepciones se verifica que el codemandado, don Martín Leonidas Arcos López deduce las excepciones de prescripción extintiva o prescripción de la acción contra las demandas de reivindicación, nulidad de acto jurídico, pago de frutos e indemnización por daños y perjuicios, siendo que, por resolución de primera instancia de fecha once de setiembre del dos mil, se declara fundada la excepción de prescripción de la acción, de pago de frutos e indemnización por I daños y perjuicios, debiendo archivarse el proceso en cuanto a estas pretensiones e infundada las excepciones de prescripción de la acción sobre reivindicación y nulidad de acto jurídico; que interpuesto recurso de apelación la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná, mediante resolución de fecha tres de enero del dos mil uno, revoca la resolución apelada en cuanto declara fundada la excepción de prescripción de la acción de pago de frutos e

indemnización de daños y perjuicios e infundada respecto a la nulidad del documento privado del quince de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, sobre donación y reformándola declara infundada las excepciones deducidas respecto al pago de frutos e indemnización de daños y perjuicios y fundada la excepción de prescripción respecto de la acción de nulidad de documento de donación, por tanto, prescrita la acción y confirmaron en lo demás que contiene; que habiendo el codemandado, don Martín Leonidas Arcos López interpuesto recurso de casación, este fue declarado improcedente mediante resolución suprema del diecinueve de noviembre del dos mil uno, por cuanto entiende esta Suprema Sala que el recurso no se encontraba dirigido contra una resolución que ponía fin a la instancia. **Tercero;** Que, continuado el proceso principal respecto de las demás pretensiones subsistentes y llevada a cabo la audiencia de conciliación, se declara saneado el proceso, se fijan los puntos controvertidos y se lleva a cabo la audiencia de pruebas; siendo que, por resolución de primera instancia de fojas seiscientos cincuenta y nueve, declara infundada la demanda de nulidad de acto jurídico consistente en el contrato privado de fecha veintisiete de mil novecientos noventa y la escritura pública de fecha doce de julio de mil novecientos noventa y uno, e infundada la acción de reivindicación, pago de frutos e indemnización de daños y perjuicios; que elevado los autos al Superior en grado, la Sala Mixta Descentralizada de Nazca en fecha treinta de abril del dos mil ocho, confirma la resolución apelada; que contra dicha resolución superior se ha interpuesto recurso de casación, el que al ser declarado procedente por resolución suprema de fecha treinta de junio del dos mil ocho, por inaplicación de normas de derecho material viene a esta Suprema Sala para el pronunciamiento de 1 fondo respectivo. **Cuarto:** Que, es un hecho acreditado en autos que el documento privado de donación otorgado por doña Hermilia Mendoza Viuda De La Cruz a favor de don Oscar

Efraín La Cruz Mendoza se efectivizó durante la vigencia del Código Civil de mil novecientos treinta y seis, cuyo artículo 1474 en su párrafo tercero establecía que la donación de inmuebles debía hacerse por escritura pública expresándose en ella individualmente los bienes donados, su valor y el de las cargas que debía satisfacer el donatario. **Quinto:** Que, en el caso de autos, si bien la referida donación se efectivizó por documento privado mas no por escritura pública, no obstante la inobservancia de la formalidad de la escritura pública no se sancionaba con la nulidad como si lo establece el Código Civil vigente en su numeral 1625. En ese contexto, si bien el artículo 1123 inciso 3 del Código Civil derogado establecía que el acto jurídico era nulo cuando no revistiese la forma prescrita por la ley, lo cierto es que conforme a lo anotado, dicha formalidad incumplida no podría traer como correlato inmediato la nulidad del referido acto jurídico, pues además no se ha probado en autos que dicho acto sea inválido por oponerse a normas imperativas, al orden público o a las buenas costumbres; sin perjuicio además que del cuaderno de excepciones se verifica que la pretensión contra el documento de donación señalado ha prescrito por resolución judicial firme; por consiguiente, la validez del referido acto sigue surtiendo sus efectos, sin que obste en contrario. los actuados penales al haber quedado ejecutoriada la resolución superior que confirma la prescripción extintiva de la donación de fecha quince de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro. **Sexto:** Que, en ese contexto, habiendo quedado cerrado todo camino judicial para pronunciarse respecto de la validez o no del acto jurídico de donación al haberse declarado fundada la excepción de prescripción del documento de donación de fecha quince de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, no resulta conducente pronunciarse respecto de los actos jurídicos posteriores al contrato de donación, en este caso, el documento privado de fecha veintisiete de febrero de mil

novecientos noventa por el que don Oscar Leopoldo La Cruz Villacorta vende a don Martín Leonidas Arcos López el Fundo San José, así como la Escritura Pública del doce de julio de mil novecientos noventa y uno, por la que se confirma la venta del citado predio rústico; por consiguiente, el demandante ha perdido toda legitimidad para obrar respecto de los demás actos posteriores al de la donación. **Sétimo:** Que, en tal sentido al no haberse verificado la inaplicación de las normas materiales denunciadas; en aplicación de lo prescrito en el artículo 397 del Código Adjetivo, **MI VOTO** es porque se declare **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto a fojas setecientos cincuenta y siete, por don Juan Alfredo La Cruz Mendoza contra la sentencia de vista de fojas setecientos trece, su fecha treinta de abril del dos mil ocho; se **CONDENE** al recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso, así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; y se **DISPONGA** la publicación correspondiente; en los seguidos por don Juan Alfredo La Cruz Mendoza contra don Martín Leonidas Arcos López y otros, sobre Nulidad de acto jurídico y otros; y se devuelva.-

SS.

FERREIRA VILDÓZOLA

ANALISIS

En esta sentencia de Casación la “Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de La República, por mayoría, se dictaminó fundado el recurso de casación” y actuando como instancia revocaron la sentencia apelada, y reformándola declararon fundada la demanda de Nulidad del Acto Jurídico y en consecuencia declararon nulos el contrato privado de compra venta y la confirmación de la venta.

En el caso en concreto, la Sala Suprema argumenta bajo el mismo criterio que se maneja en el presente estudio en cuanto a los problemas que en la práctica trae un plazo prescriptorio a la acción de nulidad de un acto jurídico.

La Sala concluye que una donación realizada sin respetar sus elementos de validez adolece de nulidad, y que si bien se ha declarado prescrita la acción de nulidad no le otorga validez al acto jurídico, así como tampoco a los consiguientes actos ligados a aquel. Asimismo, indica que los actos nulos no pueden ser subsanados por confirmación. Esto pese que a que existe una “resolución que declara fundada la excepción de prescripción respecto de la pretensión que ha adquirido la calidad de cosa juzgada”.

Por lo tanto, en la práctica (aunque no se haga la evaluación como tal) para el caso en concreto se está inaplicando el plazo referido en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil e inclusive dejando sin efecto una resolución de excepción con la calidad de cosa juzgada.

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA IMPRESCRIPTIBLE

LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO

Artículo 1º. – Agréguese el artículo 220–A en el Código Civil, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 220–A

La acción de nulidad del Acto Jurídico es imprescriptible.

Artículo 2º. – Modifíquese el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, el que quedará redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 2001. – PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

Prescriben, salvo disposición

- 1.** A los diez años, la acción personal, la acción real, y la que nace de una ejecutoria.

Exposición de Motivos

El derecho de propiedad es un derecho fundamental que se encuentra íntimamente ligado con la libertad personal, ya que a través de él se expresa la libertad económica de las personas en un Estado social y democrático de derecho. Confiere a su titular un conjunto de atribuciones que permite el uso, goce, explotación y disposición del bien, encausado en los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de propiedad se encuentra salvaguardado en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado, a fin de garantizar su inviolabilidad dentro de los límites de la ley.

Este derecho se ve limitado con el plazo prescriptorio para accionar en casos de actos jurídicos nulos en solo 10 años regulado en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil. Este plazo no es suficiente para asegurar de manera plena el derecho de propiedad. Así lo entienden, por ejemplo, en otras latitudes como la española, en la que este plazo prescribe a los 30 años; aún más, en la legislación boliviana esta acción es imprescriptible.

Es preciso señalar que en nuestra legislación existen algunas otras acciones que son imprescriptibles, como la petición de herencia y la acción reivindicatoria, que guardan estrecha relación con la acción de nulidad del acto jurídico; sin embargo, estos derechos se verían limitados, ante un acto jurídico nulo no accionado en el plazo de ley.

Asimismo, tal como señalan diversos autores como Diez Picazo *“la acción de nulidad no es imprescindible ejercitarla. Tal nulidad opera ipso iure, porque el negocio lleva en sí mismo en su estructura, la ineficacia. Por tanto, las partes que lo han concluido pueden actuar como si éste no hubiera acontecido, como si se diera la misma situación preexistente a su celebración”*.

Mantener la normativa en el estado actual implicaría continuar en un estado de incertidumbre jurídica, tanto para las partes como el tercero, en la que el titular se ve despojado de su bien por un acto nulo, y dado que este acto “no nace” o “nace muerto”, y al no poder accionar judicialmente para su nulidad, se crea una falsa apariencia de validez del negocio nulo.

En este contexto, es propicio realizar la modificación de la normativa actual, a fin de garantizar una protección más efectiva al derecho de propiedad, y en pro de crear un mejor contexto de seguridad jurídica en el tráfico de bienes.

Identificación del Problema

Con la actual redacción del inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, a efectos prácticos con la declaración judicial de prescripción de la acción de nulidad en un caso en concreto, no se estaría convalidando en absoluto este acto, ya que esta posibilidad no existe en nuestro ordenamiento, creándose de esta manera una situación de incertidumbre ante las partes.

Se tiene además que existen sentencias contradictorias o que inaplican el texto expreso de dicha norma, aunado al hecho que gran parte de la doctrina considera que la acción de nulidad debe ser imprescriptible.

Es clara la falta de regulación del tercero registral frente a un proceso de expropiación en el que no se cumplió la finalidad social para la cual se expropió.

4.1.3. Propuesta de Solución

La propuesta consiste en agregar el artículo 220–A en el Código Civil y modificar el inciso primero del artículo 2001 del mismo articulado de leyes, a fin de abordar la problemática en que nos coloca el actual plazo prescriptorio, de manera que se brinde protección adecuada y respete su derecho de propiedad, además de que el expropiado

tenga expedito su derecho para acudir a la vía judicial, a fin de que se declare la nulidad existente.

4.1.4. Justificación de la Propuesta

En tanto que el Estado salvaguarda el derecho de propiedad y el de “debido proceso en la Constitución Política del Estado”, se busca con esta modificación normativa regularizar la situación de hecho existente en tanto que con la actual configuración no está favoreciendo el tráfico de bienes, que es parte de la dinámica con la que funciona el estado.

Asimismo, dado que se trata de un acto jurídico nulo no es posible convalidarlo de acuerdo con nuestra configuración jurídica, así como tampoco lo hace el transcurso del tiempo. Tal es así que la Corte Suprema está emitiendo fallos en este sentido (Véase CAS. N° 1519-2008 ICA y CAS. N° 1519-2008 ICA), interpretando de la manera más restrictiva posible los alcances de esta norma.

En ese contexto, conviene entonces se apruebe la presente modificatoria de la norma, tanto más si como se evaluará posteriormente en el análisis costo beneficio, esta modificatoria traería un costo cero para el estado y un beneficio muy elevado en el tráfico de bienes, la seguridad jurídica y una adecuada tutela jurídica.

4.1.5. Efecto de la Propuesta en el Ordenamiento Jurídico

Agregar el artículo 220–A en el Código Civil y modificar el inciso primero del artículo 2001 del mismo articulado de leyes, trae consigo un tráfico de bienes más seguro. Además, como es bien sabido existen mafias que se dedican a realizar documentación fraudulenta con la que luego se apropian de bienes ajenos. Por lo que, con la modificatoria que se propone, el propietario tendría siempre expedito su derecho de accionar a fin de que judicialmente la nulidad de un acto que nunca existió formalmente.

Además de la seguridad, también trae consigo un mercado más dinámico, dado que con la actual configuración el propietario no podría disponer de su bien. De la misma forma, el “titular” que posee en virtud del acto nulo, por lo que en estos bienes se encuentran en una especie de limbo jurídico, del que es preciso retirarlos.

4.1.6. Análisis del Costo Beneficio

La modificación normativa que se propone no generará desembolsos adicionales al tesoro nacional, pues no tiene una implicancia económica directa.

El beneficio que sobrevenga a la vigencia de la norma, será una adecuada protección de los derechos del propietario, y la seguridad jurídica en el intercambio de bienes, y un adecuada tutela jurídica, enriqueciendo la normativa de nuestro ordenamiento jurídico.

CAPITULO V

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS

5.1. Discusión de los Resultados

De acuerdo al desarrollo de la investigación, en lo que corresponde a la discusión de los resultados, se incorpora la crítica y comentarios que se puedan hacer respecto a la forma en que se han ido reconociendo los aspectos teóricos recogidos en esta investigación y de hecho confrontados con lo que se plasma legislativamente en la realidad, así pues dicha comprensión, permitirá incorporar además sobre ello la contrastación de los resultados del examen de la realidad, esto la aplicación de dichas reglas.

Para conseguir esa estructura ordenada, se ha considerado hacer la discusión en función a las metas que se han señalado en la investigación, así pues los objetivos específicos plasman cada una de ellas, ya que han permitido incorporar de contenido a la investigación, el mismo que será discutido punto por punto a través de interrogantes que se plasman a continuación.

5.1.1. Discusión sobre el Objetivo: Describir la prescripción extintiva de la nulidad del acto jurídico.

¿Qué se puede diferenciar en las clases de prescripción?

Estas se diferencian en que la prescripción adquisitiva está vinculada a los derechos reales, es el modo originario de transformar la posesión por el derecho de propiedad. Y

sin embargo la prescripción extintiva en fundamentos subjetivos conlleva a la presunción, es decir aquello que admita prueba en contrario en este caso a la presunción del abandono del derecho que corresponde a su titular para ejercerla.

¿Tiene importancia en la vida social la prescripción de la nulidad del acto jurídico?

El tiempo se encarga de gobernar nuestras vidas gracias a él se da toda clase de evoluciones, cambios, y avances necesarios. Asimismo, tiene mayor importancia en la vida social gracias a él adquirimos o extinguimos derechos y obligaciones. En ese sentido, además tiene vital importancia en el tráfico de bienes y en la seguridad jurídica, por ello es de vital importancia realizar la modificación legislativa sostenida como parte de esta tesis.

¿Cuándo se da la interrupción y suspensión de la prescripción?

La interrupción se da cuando el derecho, luego de un periodo de inacción de parte de su titular, viene nuevamente ejercitado. Inicia así a correr un nuevo periodo de prescripción sin tener en cuenta a fines del cómputo, el tiempo precedente.

5.1.2. Discusión sobre el Objetivo: Describir el debido proceso

Teniendo en cuenta que este segundo objetivo específico se relaciona con el sentido de la investigación como variable que es el eje temático del debido proceso, es imprescindible traer a discusión los contenidos a fin de criticarlos en el sentido del aporte doctrinario que permita evidenciar las falencias de la regla que se ocupa de tal fin prescriptorio.

¿Por qué es importante el debido proceso en la prescripción?

Debe comprenderse lo relevante que resulta tocar este tipo de figuras jurídicas, puesto que se consideran como la base de la estructura procesal, dado que permite alcanzar la tan ansiada seguridad jurídica que conlleva a la asunción del proceso como una herramienta confiable para los justiciables que acuden al sistema de justicia con la esperanza de alcanzarla. Es por ello, que a fin de que los justiciables hagan valer los derechos que le correspondan sin que se puedan oponer restricciones por parte del beneficiado con un acto jurídico nulo (con la excepción de prescripción), se deba modificar la actual configuración del código sustantivo y declarar imprescriptible la nulidad del acto jurídico.

6.1.3. Discusión sobre el Objetivo: Proponer la derogatoria y reforma del Código Civil, en el extremo que regula que la nulidad del acto jurídico prescribe a los diez años.

Sobre la comprobación de validez de este objetivo específico se debe señalar que conforme se ha desarrollado precedentemente a nivel práctico resulta poco útil mantener la forma legislativa de la prescripción de los actos jurídicos nulos, esto debido a que estos no pueden ser materia de convalidación (ya que no existe en nuestro ordenamiento

jurídico), por tanto se mantendrán siempre nulos, quedando así excluidos del tráfico jurídico.

Ello aunado al hecho que, de querer sanear el problema, solicitando judicialmente su nulidad, esto podría ser declarado prescrito en caso que en la contradicción se solicite y hayan transcurrido más de 10 años de la inacción del propietario perjudicado.

Por estas razones, y tomando en cuenta además que de mantener el statu quo, se afectarían derechos fundamentales como el derecho de propiedad y el debido proceso, es que la postular es que derogatoria y reforma del Código Civil, en el extremo que regula que la nulidad del acto jurídico prescribe a los diez años, para lo que se ha presentado en este trabajo un proyecto de modificación normativa.

6.2. Resultados de Validación de Variables

El factor que determina la validez de las variables que intervienen en el proceso de investigación es crucial y se desarrolla en función a los resultados que se hayan obtenido de discutir cada uno de los objetivos específicos que como metas de la investigación, en su momento estuvieron compuestas o inspiradas en las mismas variables, por lo cual las tomas de postura que se asuman respecto a ellas, se podrán agrupar con el fin de establecer cuan cierta resulta la afirmación inicial que configuran la causa y el efecto del problema.

6.2.1. Respecto a la Variable Independiente: Prescripción Extintiva de la Nulidad del Acto Jurídico.

Teniendo en cuenta que la validación de las variables se hace en razón de la acumulación de los resultados que se han obtenido de la discusión de los contenidos en la parte inicial de la contrastación y que dicho resultado, en tanto tomas de postura, han llegado a establecer el hecho de que las variables asumen un sentido, debe dejarse sentado el hecho de que son los elementos que componen toda la investigación.

Para el fin de reconocer cuan válidas son las afirmaciones que corresponden a las variables en este primer punto se trata de la variable independiente que se tratará de comprender como la causa del problema, esto es su validación dependerá de si se establece con exactitud a su construcción como aquel elemento que está provocando inestabilidad en el proceso civil.

Es propiamente de este fundamento subjetivo que la contraparte puede hacer uso de la naturaleza jurídica de la prescripción extintiva a través de la excepción dando razón a la parte demandada por la inactividad del actor. Además, estas se diferencian en que la prescripción adquisitiva y prescripción extintiva, tiene mayor importancia en la vida social gracias a él adquirimos o extinguimos derechos y obligaciones. Razón por la cual, no es más que otra parte que nos pertenece desde que nacemos hasta que morimos. La interrupción se da cuando el derecho, luego de un periodo de inercia de parte de su titular, viene nuevamente ejercitado. Inicia, así, a correr un nuevo periodo de prescripción sin tener en cuenta a fines del cómputo, el tiempo precedente.

6.2.2. Respecto a la Variable Dependiente: Vulneración a las Garantías al Debido Proceso.

Conforme se ha podido apreciar en la construcción de la validación de la variable independiente como causa del problema, en esta ocasión corresponde hacer hincapié en el sentido que opera sobre la variable dependiente, el cual debe ser asumido como el efecto del problema, esto es si efectivamente su validación determina que existen la vulneración a las garantías del debido proceso en razón de la incorrecta aplicación de la prescripción, con lo cual se dejará por sentada la segunda parte de la hipótesis conclusiva.

Es una garantía procesal, que en su dimensión procesal asegura al ciudadano la observancia de reglas constitucionales procesales para obtener un proceso formalmente válido; Se debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley, se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los procedimientos legales, además es una manifestación compleja de una serie de distintos derechos y garantías indispensables y muchas veces inseparables. En ese sentido, señalaremos de forma enunciativa mas no taxativa, algunos de esos derechos y garantías que lo comprenden. “Es preciso considerar la gran relevancia y trascendencia del tema en comentar, porque, finalmente, por un lado, el justiciable precisa de una solución judicial civil justa y oportuna a su conflicto”.

6.3. Contrastación de Hipótesis

Es en esta porción de la investigación que se llega a la acumulación de toda la información en síntesis, así pues el sentido de la construcción de los objetivos en base a las variables, luego la discusión de los contenidos que incorporan como metas de la investigación, y las tomas de postura como resultado de ello que consolidan la validación de cada una de las

variables, permiten estos resultados finales acumularse como una sola opinión que se consolida en razón de la unión de las nuevas variables para conformar la hipótesis conclusiva que se muestra a continuación comparada con la hipótesis inicial:

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	
HIPÓTESIS INICIAL	HIPÓTESIS CONCLUSIVA
La aplicación de la prescripción extintiva de la nulidad del acto jurídico vulnera las garantías al debido proceso..	Se ha llegado a la conclusión que, si se continua aplicando la prescripción de la nulidad del acto jurídico en nuestro código civil se vulneran las garantías del debido proceso.

En razón a la comparación de las hipótesis se puede apreciar el sentido lógico que se desprende de sus afirmaciones por lo mismo que se ha llegado a una conclusión que, si se debe aplicar la imprescriptibilidad de la nulidad del acto jurídico en nuestro código civil ya que se harían valer los derechos, las garantías del debido proceso.

CONCLUSIONES

- PRIMERA** Se ha determinado que, con la configuración actual, del plazo prescriptorio del acto jurídico nulo establecido en el inciso 1 del art. 2001, se vulnera las garantías al derecho constitucional al debido proceso, ya que se limita la acción del peticionante a un periodo de solo 10 años para obtener una sentencia meramente declarativa de un acto no existente. Por lo tanto, el perjudicado con un acto jurídico nulo debe tener expedito su derecho para accionar en cualquier momento, por cuanto resulta contraproducente señalar que el acto jurídico nulo no es confirmable, y si no es confirmable siempre será nulo.
- SEGUNDA** Se ha logrado describir de manera clara la prescripción extintiva de la nulidad del acto jurídico como una limitante de la acción judicial supeditada a encontrarse dentro del plazo estipulado en 10 años.
- TERCERA** Se ha descrito en la investigación al debido proceso y sus garantías, el cual tiene una importancia trascendental. En razón de conocer si existe una vulneración a las garantías al debido proceso en la prescripción extintiva del acto jurídico nulo. Quedando demostrado a lo largo de la presente investigación,

que la propuesta de establecer instrumentos jurídicos a espaldas o contrariando reglas del debido proceso plasmadas constitucionalmente, no debe prevalecer.

CUARTA Se ha realizado una propuesta de reforma del inciso 1 del artículo 2001 y la promulgación del artículo 220-A del Código Civil que en su conjunto declaran imprescriptible la Acción de Nulidad del Acto Jurídico.

RECOMENDACIONES

- PRIMERA** Dado que se ha demostrado que en nuestra legislación existe la necesidad de modificar el Código Civil en cuanto a eliminar la parte pertinente del inciso 1 del art. 2001 del Código Civil en lo referente a la prescripción extintiva de la acción de nulidad de los actos jurídicos en un plazo de 10 años.
- SEGUNDA** Se recomienda incorporar el artículo 220-A al Código Civil a fin de declarar expresamente imprescriptible la acción de nulidad del acto jurídico.
- TERCERA** Con la finalidad de acercarse a una aplicación plena de los derechos y garantías que ampara la Constitución Política del Perú, se recomienda considerar esta propuesta en lo referente a una Ley modificatoria.
- CUARTO** Tomando en consideración la situación actual en la que nos encontramos, con el congreso disuelto, propongo se realice un pleno jurisdiccional civil con la intención de ventilar la problemática evidenciada en esta investigación a fin de plasmar los mecanismos jurisdiccionales más idóneos y evitar con ello atentar contra el debido proceso.

BIBLIOGRAFIA

Couture, E. J. (2002). *Fundamentos del Derecho Procesal Civil* (Cuarta ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Montevideo de Buenos Aires.

Coviello, N. (2017). *Doctrina General del Derecho Civil*. Santiago de Chile, Chile: Ediciones Jurídicas Olejnik.

Cuadros Villena, C. F. (1996). *Acto Jurídico: Curso Elemental*. Lima, Perú: Editora FECAT.

Enneccerus, L. (1954). *Tratado de Derecho Civil*.

Gonzáles Linares, N. (2007). *Derecho Civil Patrimonial: Derechos Reales*. Lima, Perú: Palestra.

León Barandiarán, J. (1991). *Tratado de Derecho Civil Peruano*. Lima.

Lohmann Luca de Tena, G. (1994). *El Negocio Jurídico*. Lima, Perú: Editora Jurídica GRIJLEY.

Messineo. (1954). *Anual de Derecho Civil y Comercial*.

Morales Godo, J. (2005). *Instituciones de Derecho Procesal*. Lima, Perú: Palestra Editores.

Osterling Parodi, F., & Castillo Freyre, M. (2019). *osterlingfirm*. Obtenido de http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/todo_prescribe_o_caduca.pdf

Ribó Durand, L. (1987). *Diccionario de Derecho*. Barcelona, España: Casa Editorial Bosch.

Rocco, U. (1969). *Tratado de Derecho Civil*. Buenos Aires, Argentina: Depalma.

Rubio Correa, M. A. (2001). *Nulidad y Anulabilidad. La Invalidez del Acto Jurídico*. Lima: Fondo Editorial PUCP.

Sagástegui Urteaga, P. (2003). *Exégesis y Sistemática del Código Procesal Civil*. Lima, Perú: Editora Jurídica GRIJLEY.

Silva Vallejos, J. A. (2007). *El Pensamiento Filosófico y Jurídico*. Lima, Perú.

Taboada Córdova, L. (2002). *Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato*. Lima, Perú: Grijley.

Ticona Postigo, V. (2009). *El Derecho al Debido Proceso en el Proceso Civil*. Lima, Perú: Editorial GRIJLEY.

Vidal Ramírez, F. (1985). *La Prescripción y la Caducidad en el Código Civil Peruano*. Lima, Perú: Cultural Cuzco Editores.

Vidal Ramírez, F. (1986). *Teoría General del Acto Jurídico*. Lima, Perú: Cultural Cuzco.

Vidal Ramírez, F. (2013). Precisiones en torno a la Prescripción Extintiva y a la Caducidad. *LEX*, XI.

Vidal Ramírez, F. (2016). *El Acto Jurídico* (Décima ed.). Lima, Perú: Instituto Pacífico.

